

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésimo Cuarta Reunión del Comité de Expertos
Del 8 al 12 de septiembre de 2014
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.421/14 rev. 4
12 septiembre 2014
Original: español

SURINAME

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 12 de septiembre de 2014)

SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en el la República de Suriname del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Suriname en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de la República de Suriname al cuestionario; la información recabada por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2014 por los miembros del subgrupo de análisis de Suriname, integrado por Brasil y Paraguay, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Suriname y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas, y brindó a Suriname la oportunidad de ofrecer y/o requerir asistencia técnica para los propósitos de la Convención.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si este es adecuado, y si producen los resultados esperados; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Suriname analizados en este informe son: la Alta Corte de Justicia, la Procuraduría Pública, el Ministerio de Justicia y Policía y la Agencia Central de Auditoría (CLAD, por sus siglas en holandés).

Algunas de las recomendaciones formuladas a Suriname para su consideración, en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

En relación con la Alta Corte de Justicia, la reanudación del proceso de nombramiento de jueces; la implementación de un manual de clasificación y descripción de funciones para jueces, así como el desarrollo de procedimientos disciplinarios y un código de ética para jueces; el fortalecimiento de la autonomía presupuestaria de la Alta Corte de Justicia; y el establecimiento de la obligación de la Alta Corte de Justicia de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre sus funciones constitucionales de administración de justicia.

Por lo que se refiere a la Procuraduría Pública, el fortalecimiento de este órgano mediante la dotación de recursos humanos y presupuestarios; la creación dentro del Departamento de Policía de una unidad anticorrupción que trabaje en coordinación con la Procuraduría Pública; el fortalecimiento de la autonomía presupuestaria de la Procuraduría Pública; y el establecimiento de la obligación de la Procuraduría Pública de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre sus funciones constitucionales de investigación y procesamiento de actos delictivos, incluidos los actos de corrupción.

En lo tocante al Ministerio de Justicia y Policía (MJP), la implementación medidas para encomendar oficialmente al MJP o a algún otro órgano las funciones de prevención de la corrupción; el desarrollo de procedimientos reglamentados para la toma de decisiones y el fortalecimiento de mecanismos de control interno; la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional; y la publicación de los informes anuales financieros y de gestión del MJP en su página Web y a través de otros medios de comunicación.

Por lo que respecta a la Agencia Central de Auditoría (CLAD), el establecimiento de la obligación de dar curso a aquéllos casos que resulten con indicios de hechos delictivos directamente a la Procuraduría para su investigación y procesamiento; la actualización de la normativa que regula la CLAD, estableciendo las condiciones para que este órgano pueda contar con un Director y Junta Directiva; y la publicidad de los informes de gestión memorias anuales de la CLAD, de manera que la ciudadanía pueda conocer esta información.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Suriname en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Suriname en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se definieron cuales de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; y cuáles precisaban ser reformuladas, y hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Suriname en la Primera Ronda que quedan vigentes, apuntan a propósitos tales como el fortalecimiento de la implementación de normas sobre conflictos de intereses de los servidores públicos; la adopción de mecanismos que exijan específicamente a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento; el establecimiento de sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos; el establecimiento de un sistema efectivo aplicable para el acceso a la información pública; y el establecimiento de leyes y mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a participar en el seguimiento de la gestión pública.

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA DE SURINAME DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADAS EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LA PRIMERA RONDA ¹

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del Informe

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en la República de Suriname de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el Artículo III, Párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Suriname por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y la Tercera Ronda, los cuales se encuentran publicados en la siguiente página en “Internet” http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_sur_en.pdf

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República de Suriname ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 27 de mayo de 2002, depositando el instrumento respectivo de ratificación el 4 de junio del mismo año.

[5] Asimismo, la República de Suriname suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2002.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

¹ El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 12 de septiembre de 2014, en el marco de su Vigésimo Cuarta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 8 al 12 de septiembre de 2014.

1. Respuesta de la República de Suriname

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República de Suriname en todo el proceso de análisis y, en especial, del Ministerio de Justicia y Policía (MJP), la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. La República de Suriname envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en la siguiente página en “Internet” http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_sur.htm

[7] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, la cual se realizó durante los días 1 al 3 de abril de 2014, por parte de los representantes de Brasil y de Paraguay, en su calidad de integrantes del subgrupo de análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República de Suriname hasta el día 3 de abril de 2014, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*. http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_sur.htm

2. Información recibida de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores.

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada la República de Suriname, se recabó información de la sociedad civil y del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

[11] La República de Suriname cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar los siguientes: El Departamento de la Procuraduría Pública; la Alta Corte de Justicia y sus jueces; la Agencia Central de Auditoría (CLAD, por sus siglas en holandés); el Instituto Supremo de Auditoría (ISA - *Rekenkamer van Suriname* su nombre en holandés); el Ministerio del Interior; el Ministerio de Justicia y Policía (MJP); la Oficina de Administración de Impuestos, que se encuentra bajo el Ministerio de Finanzas; y la Asamblea Nacional (Parlamento).

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cuatro órganos seleccionados por la República de Suriname que serán analizados en el presente informe.

[13] La Alta Corte de Justicia, cuya función en el marco de sus atribuciones constitucionales es la administración de justicia².

[14] El Departamento de Procuraduría Pública, que en el marco de sus atribuciones constitucionales tiene la responsabilidad exclusiva de la investigación y procesamiento de todos los actos punibles³.

[15] La Agencia Central de Auditoría (CLAD), responsable de las auditorías de la administración del Estado y de las empresas públicas⁴.

[16] El Ministerio de Justicia y Policía (MJP), cuyas funciones, de conformidad con el “Decreto sobre Descripción de Funciones de los Departamentos”, No. 58 del 10 de octubre de 1991, incluyen “*la organización judicial y los asuntos de personal del Poder Judicial*”⁵. Adicionalmente, a través del Departamento de Relaciones Internacionales y otros Departamentos, el MJP desarrolla actividades anticorrupción⁶.

1. ALTA CORTE DE JUSTICIA

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.

[17] La Alta Corte de Justicia cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[18] Suriname cuenta con tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, siendo la Alta Corte de Justicia parte del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución que establece que: “*1. El Poder Judicial consistirá en el Presidente y Vice-Presidente de la Alta Corte de Justicia, los miembros y alternos de la Alta Corte de Justicia, el Procurador General de la Alta Corte de Justicia, y otros miembros del Departamento de la Procuraduría Pública, y de*

² Artículo 133.3 y 139 de la Constitucionales.

³ Artículo 145 Constitucional.

⁴ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 2.

⁵ Artículo 6, Capítulo II del Decreto del 10 de octubre de 1991.

⁶ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 3.

otros oficiales judiciales designados por ley. 2. La ley preverá los casos en que personas que no pertenecen al Poder Judicial tomen también parte de las actividades del Poder Judicial. 3. El Presidente, el Vice-Presidente, los miembros y alternos de la Alta Corte de Justicia constituyen el Poder Judicial, que está encargado de la administración de justicia.”

[19] Asimismo, el artículo 139 de la Constitución establece que el órgano supremo del Poder Judicial encargado de la administración de justicia se llama Alta Corte de Justicia de Suriname. La alta Corte supervisará el curso regular y la resolución de todos los procedimientos judiciales.

[20] Adicionalmente, el artículo 131, párrafo 3 de la Constitución establece que estará prohibida cualquier interferencia en la investigación o procesamiento de casos, y en aquellos pendientes en el juzgado.

[21] Por lo que respecta a las excepciones al ámbito de sus funciones, el párrafo 2 del artículo 133 de la Constitución establece que la imposición de penas y medidas previstas en la ley está también a cargo del Poder Judicial, que está a cargo de la administración de justicia, sujeto a las excepciones contempladas en la ley, que en relación con detenciones se refiere únicamente al derecho penal militar y a las normas disciplinarias.

[22] En lo referente a la coordinación interinstitucional, durante la reunión anual de la Alta Corte de Justicia, la cual es atendida también por el Procurador General, se toman decisiones concernientes a la división de trabajo para el año siguiente. Dos veces al año, los jueces penales y una delegación de la Procuraduría Pública se reúnen para discutir aspectos sobre la administración de justicia penal.

[23] Con relación a la manera en la que se adoptan sus decisiones, el artículo 39 de la Ley sobre la organización y composición del Poder Judicial establece que la Alta Corte de Justicia toma sus decisiones con tres jueces en todos los casos. Asimismo, teniendo en consideración que todos los jueces son miembros o miembros alternos de la Alta Corte de justicia, un miembro que haya conocido de un caso en primera instancia, no deberá participar en la consideración de ese caso en la siguiente instancia⁷.

[24] Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del Acta de Organización Judicial, el Procurador General está a cargo de la ejecución de las sentencias dictadas por los jueces.

[25] De conformidad con el párrafo 2 del artículo 141 de la Constitución, los miembros del Poder Judicial encargados de la administración de justicia serán designados por el Gobierno⁸, con la recomendación de la Alta Corte de Justicia. El párrafo 3 del mismo artículo establece que la ley determinará las otras condiciones para los nombramientos, así como las previsiones financieras para su beneficio y el de sus familiares supérstites.

[26] Al respecto, el Decreto Presidencial del 5 de octubre de 1976⁹, reformado el 20 de junio de 2006¹⁰, estableció el Reglamento de Selección y Formación de las Autoridades del Poder Judicial. Dicho decreto presidencial dispone que el Ministro de Justicia y Policía (MJP)

⁷ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 5.

⁸ El artículo 116 de la Constitución dispone que “1. El Presidente, el Vice-Presidente y el Consejo de Ministros conjuntamente conforman el Gobierno. El Vice-Presidente está a cargo del manejo diario del Consejo de Ministros, y como tal es responsable ante el Presidente. 2. El Gobierno es responsable ante la Asamblea Nacional”.

⁹ Gaceta Oficial de la República de Suriname No. 54.

¹⁰ Gaceta Oficial de la República de Suriname No. 66.

establecerá un Consejo para la selección y formación de los miembros del Poder Judicial. Este consejo está, conformado por dos representantes de la Alta Corte de Justicia, dos miembros de la Procuraduría Pública nominados por el Procurador General, un miembro/profesor empleado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Suriname Anton de Kom, un miembro de la Barra de Abogados nominado por la misma, y un miembro designado por el Ministro de Justicia y Policía.

[27] De conformidad con el citado párrafo 2 del artículo 141 de la Constitución, los nombramientos de los miembros de la Alta Corte de Justicia vitalicios; mientras que el artículo 14.a d la Ley sobre la organización y composición del Poder Judicial establece que la edad de retiro de los jueces es de 70 años.

[28] Los miembros de la Alta Corte de Justicia pueden ser separados de sus cargos por las razones establecidas en los artículos 142 y 143 de la Constitución.¹¹

[29] En relación con procedimientos disciplinarios para los jueces, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Organización Judicial el Presidente de la Alta Corte de justicia está facultado para amonestar al *“Vicepresidente, los miembros, los miembros alternos y el Secretario de la Corte, en casos de negligencia ya sea de la dignidad del cargo o de las actividades de su cargo ya sea de oficio o por solicitud del Procurador General tras escucharlo.”*

[30] Por cuanto a los requisitos para ser juez, estos se encuentran en párrafo 1 del artículo 141 de la Constitución, que dispone que para ser nombrado como miembro de la Judicatura a cargo de la administración de justicia, uno debe haber alcanzado la edad de treinta años, ser ciudadano surinamés, y tener su residencia actual o principal en Suriname. En caso de decidirse que un candidato necesita atender el programa de estudios de preparación para oficiales judiciales (RAIO *Opleiding*, por sus siglas en holandés), el procedimiento de selección y educación para miembros del Poder Judicial prevé que un candidato deberá tener título de abogado, particularmente maestría en derecho, y haber completado el programa de entrenamiento para oficiales judiciales.

[31] Los secretarios y personal administrativo al servicio del Poder Judicial son seleccionados y reclutados por el Ministerio de Justicia y Policía, de conformidad con los procedimientos establecidos para el personal al servicio del Estado. Estos oficiales hacen parte del servicio civil asignados al Poder Ejecutivo.

[32] Igualmente, por las razones arriba descritas, los secretarios y personal administrativo desempeñándose dentro del sistema judicial se rigen bajo el sistema de descripciones de funciones del Gobierno (FISO por sus siglas en holandés).

¹¹ Artículo 142 de la Constitución: *“1. Los miembros del Poder Judicial encargados de la administración de justicia y el Procurador General de la Alta Corte de Justicia son separados de sus cargos por el Gobierno a solicitud propia; al alcanzar la edad de retiro. 2. Las personas mencionadas en el primer párrafo pueden ser separadas de sus cargos por el Gobierno a propuesta de la Alta Corte de Justicia: cuando han sido puestos bajo restricción legal; en caso de desorden mental continuo y comprobado; cuando han sido sentenciados a detención irrevocable por haber cometido un acto punible; si se han declarado en bancarrota; cuando han obtenido una moratoria o se encuentran bajo custodia judicial por deudas civiles; en caso de mala conducta o inmoralidad serios o en el caso de negligencia continua y comprobada en el cumplimiento de sus funciones”.*

Artículo 143 de la Constitución: *“Si el Presidente de la Alta Corte de Justicia considera que una de las razones para el descargo es alguna de las mencionadas en el párrafo 2 del artículo 142, podrá suspender a la persona en cuestión y también podrá proveer un reemplazo temporal en esa oficina. La ley regulará las consecuencias de la suspensión y separación del servicio”.*

[33] El estado analizado cuenta con un programa de capacitación para oficiales judiciales con una duración de cinco años, que incluye una escolaridad teórica y un entrenamiento práctico. La escolaridad teórica es ejecutada por el *Stitching Jurisdiche Samenwerking Suriname-Nederland* (SJSSN), que es una organización local no gubernamental con miras a la educación profesional y permanente para, entre otros, jueces, Secretarios de la Corte y personal administrativo empleado en el sistema judicial¹².

[34] Los procedimientos disciplinarios con relación al cumplimiento de las funciones de los secretarios y personal administrativo al servicio del sistema judicial están previstas en la Ley de Personal empleado por el Estado y administrado por el Ministerio de Justicia y Policía (MJP).

[35] El presupuesto de la Alta Corte de Justicia está incorporado dentro del presupuesto del MJP, el cual es responsable de su administración de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6, capítulo II, del Decreto de Descripción de Funciones de los Departamentos No. 58, del 10 de octubre de 1991.

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[36] La Alta Corte de Justicia cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[37] En primer lugar, en relación con el procedimiento de selección de los jueces, el Comité toma nota de que el párrafo 2 del artículo 141 de la Constitución establece que los jueces serán designados por el Gobierno (Presidente de la República, el Vicepresidente y el Consejo de Ministros), con la recomendación de la Alta Corte de Justicia y que la ley establecerá las otras condiciones para estos nombramientos, así como las provisiones financieras para los miembros del Poder Judicial y sus familiares supérstites.

[38] En ese sentido, el Comité observa que el Estado analizado ha adoptado el Reglamento de Selección y Formación de los miembros del Poder Judicial, que incluye las responsabilidades y facultades del Consejo para la Selección y Educación del Poder Judicial y del Ministro de Justicia y Policía.

[39] Como se ha mencionado anteriormente, de conformidad con este procedimiento el Ministro de Justicia y Policía es responsable de nombrar a los miembros del Consejo de selección y formación del personal del Poder Judicial, que como se había mencionado anteriormente, está compuesto por dos miembros propuestos por la Alta Corte de Justicia, dos miembros de la Procuraduría propuestos por el Procurador Judicial, un docente propuesto por la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Suriname Anton de Kom; un abogado miembro de la Barra de Abogados y propuesto por la misma; y un miembro designado por el Ministro de Justicia y Policía. De conformidad con el Reglamento de Selección y Formación de los Miembros del Poder Judicial, uno de los miembros propuestos por la Alta Corte de Justicia servirá como Presidente y uno de los miembros de la Procuraduría actuará como Vicepresidente del Consejo. Estos nombramientos una duración de cinco (5) años, con la posibilidad de ser reelegidos una sola vez.

[40] En virtud del citado Reglamento, una vez al año, el Ministro de Justicia y Policía anuncia las vacantes en el Poder Judicial. Las partes interesadas envían sus solicitudes al Ministro. Este remite

¹² Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 8.

las solicitudes al Consejo. El Consejo selecciona y envía la lista de candidatos seleccionados y no seleccionados al Ministro. Poco tiempo antes de que deba completarse la capacitación de cinco años, el Consejo, de acuerdo con la presentación de los documentos pertinentes, remite una recomendación motivada al Ministro de Justicia y Policía con vistas a la recomendación para el nombramiento de la persona en cuestión como miembro alternativo de la corte o procurador sustituto. El Ministro de Justicia y Policía toma esta decisión y presenta a los candidatos seleccionados para su consideración por el gobierno, el cual hace los nombramientos relevantes de acuerdo con la Constitución. Los documentos de apoyo se acompañan al informe.

[41] Sobre el particular, durante la visita *in situ*, los representantes de la Alta Corte de Justicia pusieron de presente que los mandatos de la mayoría de los miembros del Consejo habían expirado, en algunos casos desde hacía dos años, y que el Ministro de Justicia y Policía aún tiene que solicitar a las autoridades correspondientes que recomienden miembros para ser nombrados. Asimismo, agregaron que a principios de 2014 ya el Consejo había entregado la recomendación razonada al Ministro de Justicia respecto de ocho oficiales judiciales en entrenamiento, con vista a la nominación para sus nombramientos como miembros alternos de la Alta Corte, y que el Ministro de Justicia y Policía aún tenía que tomar una decisión respecto a dicha recomendación.

[42] Asimismo, los representantes de la Alta Corte de Justicia resaltaron que había un atraso alarmante de casos y que hay una falta igualmente alarmante de jueces, personal y recursos, lo que hace aún más urgente la necesidad de nombrar jueces. Cabe agregar que previamente el Estado analizado en su respuesta ya había puesto de presente la escasez de jueces como una de sus dificultades para cumplir a cabalidad sus funciones¹³.

[43] Teniendo en cuenta que la Alta Corte de Justicia es el órgano constitucional encargado de la administración de justicia y de sancionar los actos de corrupción, el Comité considera de vital importancia que se reanude el proceso de nombramiento de jueces a la brevedad posible, garantizándole además que cuente con el número de jueces necesarios para cumplir cabalmente su función de administración de justicia y de sanción de actos de corrupción, así como descongestionar el sistema y agilizar los procesos que han caído en mora judicial (ver recomendación 1.4.1. del Capítulo II de este informe).

[44] En ese sentido, el Comité desea resaltar que un sistema judicial funcional e independiente es vital para poder dar cumplimiento a los propósitos de la Convención, siendo que la Alta Corte es el órgano constitucional encargado de impartir justicia y sancionar los delitos de corrupción. Por lo tanto, además de reanudar el proceso de selección de jueces y ejecución del programa de entrenamiento de oficiales judiciales a la brevedad posible, el Estado analizado debería encontrar un mecanismo para garantizar que el proceso no se obstaculice ni paralice, asegurando a la vez su transparencia, equidad y eficiencia, de conformidad con los objetivos de la Convención, y por lo tanto formulará recomendaciones (ver recomendación 1.4.2. del Capítulo II de este informe).

[45] Cabe señalar que durante la visita *in situ*, el representante de la Barra de Abogados de Suriname, indicó que se cuenta con un número muy escaso de jueces, lo que afecta la calidad del proceso y de las sentencias, agregando que existe un retraso de más de 20 años en el procesamiento de casos.

[46] Por lo que respecta al funcionamiento del Consejo de Selección, señaló que no está funcionando a cabalidad, agregando que el término del representante de la Barra de Abogados ante dicho Consejo venció hace dos años sin que el Ministro de Justicia y Policía haya nombrado aún su reemplazo. En ese mismo orden de ideas, manifestó que la Barra de Abogados, si bien participa en la

¹³ Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 13.

formación de jueces, no participa en su selección, nombramiento e instalación y que al Consejo simplemente se le notifica cuando se ha nombrado un nuevo juez.

[47] Finalmente, puso de presente que ocho jueces terminaron con su formación, pero que hay una discusión con respecto a sus nombramientos debido a que comenzaron su formación durante el gobierno pasado, señalando que esto es endémico y que sucede cada vez que hay elecciones.

[48] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con descripciones de funciones y manuales de clasificación de cargos, el Comité observa que si bien el personal administrativo de la Alta Corte de Justicia, por pertenecer al Ministerio de Justicia y Policía, se rige por el manual de funciones y clasificación de este órgano del Ejecutivo, no existe manual de clasificación ni descripciones de funciones de los jueces de la Alta Corte. Al respecto, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.3. del Capítulo II de este informe).

[49] En tercer lugar, por lo que se refiere a la formación de jueces, el Comité toma nota de que si bien se cuenta con el programa de estudio para oficiales judiciales en entrenamiento (RAIO *Opleiding*) que para estos fines prevé el Reglamento de Selección y Formación del Personal del Poder Judicial, durante la visita *in situ* los representantes de la Alta Corte de Justicia manifestaron que el tema de corrupción no se encuentra específicamente contemplado en este programa y que tampoco se capacita a los jueces existentes en la materia. Teniendo en consideración que la Alta Corte de Justicia es el órgano encargado de sancionar los actos de corrupción, el Comité considera de gran importancia contar jueces capacitados y al día en los temas contemplados en la Convención, para lo cual el Estado analizado podría incluir el tema como parte del currículo del programa de formación de oficiales judiciales (RAIO *Opleiding*), y como parte del programa de capacitación continua para que ya están nombrados y el resto del personal de apoyo asignado a la Alta Corte de Justicia, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.4. del Capítulo II de este informe).

[50] En cuarto lugar, por lo que respecta a la manera en que se garantizan sus recursos, el Comité toma nota de que la Alta Corte de Justicia no cuenta con un presupuesto propio, sino que su presupuesto se encuentra contemplado dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia y Policía, quien lo administra y controla. En este sentido, el Comité toma nota de que el Estado analizado, en su respuesta, también pone de presente como una de sus dificultades para el cabal cumplimiento de sus funciones la falta de recursos presupuestarios. Durante la visita *in situ*, los representantes de la Alta Corte de Justicia mencionaron que la autonomía presupuestaria promovería el efectivo funcionamiento de la Corte. Al respecto, el Estado analizado indicó también en su respuesta al cuestionario, que ya se están llevando a cabo discusiones a nivel del Gobierno, con la mira de establecer un presupuesto independiente y suficiente para el Poder Judicial.

[51] Adicionalmente, el Comité desea resaltar la importancia de contar con una judicatura independiente que cuente con suficiente autonomía presupuestaria, así como con recursos adecuados, para cumplir a cabalidad con su función constitucional de administración de justicia y contribuir así a la implementación de los propósitos de la Convención. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.5. del Capítulo II de este informe).

[52] En ese mismo orden de ideas, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas necesarias a los fines de posibilitar que la Alta Corte de Justicia pueda presentar y administrar su propio presupuesto anual, así como sus propios planes anuales (ver recomendación 1.4.6. del Capítulo II de este informe).

[53] Cabe señalar que ya en 2001 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se había referido a este tema. En efecto, en su documento “*Gobernabilidad en Suriname*” expresa que “*El que el*

ejecutivo y el parlamento asignen el presupuesto del Poder Judicial no es raro: esta es la práctica estándar en la mayoría de los países de las Américas, aunque las cortes tienen una cierta variedad en la participación de su proceso de preparación presupuestaria. Lo que sí es algo poco usual en el caso de Suriname es que el presupuesto del Poder Judicial está administrado por el Ministerio de Justicia y Policía (MJP), y que su personal administrativo es asignado por la división de recursos humanos del MJP y no contratados por la judicatura. Esto significa que en la práctica, los jueces, procuradores y personal de las cortes no pueden comprar lápices ni computadoras ni contratar personal, sino que tienen que solicitarle al MJP que lo haga por ellos.” Adicionalmente, al referirse al Artículo 6 del Decreto de Descripción de Funciones de los Departamentos, de 1991, agregan en nota al pie “*La inclusión del encargo de la organización y personal judicial dentro de las funciones del MJP parecerían hacer difícil argumentar que el Poder Judicial es enteramente independiente del Ejecutivo en Suriname.*”¹⁴

[54] En ese sentido, durante la visita *in situ*, los representantes de la Barra de Abogados manifestaron que cuando se obtuvo la independencia de Suriname, la estructura quedó igual y no se hizo una división del presupuesto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Esto resultó en que para cada tema la Alta Corte de Justicia tiene que hacer una solicitud de financiamiento al MJP, que posteriormente va al Ministerio de Finanzas y otros ministerios para aprobación, lo que retrasa el proceso de aprobación de fondos para llevar a cabo los procesos.

[55] En quinto lugar, por lo que se refiere a la manera en que se contratan los recursos humanos administrativos y de apoyo de la Alta Corte de Justicia, estos funcionarios son contratados por el Ministerio de Justicia y Policía (MJP) de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Personal.

[56] Al respecto, durante la segunda ronda el Comité analizó los procedimientos de contratación de los servidores públicos y formuló recomendaciones puntuales al Estado analizado sobre la Ley de Personal y por lo tanto no se referirá a este procedimiento. Sin perjuicio de ello, y teniendo en consideración el retraso y congestionamiento en la consideración de causas en la Alta Corte de Justicia, el Comité considera que sería útil que el Estado considerara asegurar que este órgano cuente con suficiente personal que esté además adecuadamente capacitado para llevar a cabo las tareas de apoyo a la administración de justicia, asegurando que tenga una mayor injerencia en la contratación de su propio personal, y para ello formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.4.7. y 3.4.10. del Capítulo II de este informe).

[57] En sexto lugar, en lo que tiene que ver con las instalaciones para la conducción de la administración de justicia y de la seguridad en el manejo y preservación de expedientes, durante la visita *in situ* los representantes de la Alta Corte de Justicia manifestaron que por lo menos dos edificios de la Corte y los expedientes que se encontraban alojados en ellos fueron destruidos por incendio. Agregaron que aunque ya les han construido dos edificios nuevos para reemplazar los incendiados, aún les hace falta un tercero que tenga las condiciones para poder cumplir con sus funciones de administración de justicia. Al respecto, el Comité considera que la seguridad procesal mediante la conservación de expedientes judiciales es esencial para la efectiva administración de justicia y para la persecución y sanción de actos de corrupción. En ese sentido, estima pertinente que el Estado analizado considere tomar medidas para asegurar que la Alta Corte de Justicia cuente no solamente con instalaciones adecuadas para el cabal cumplimiento de sus funciones, sino también con sistemas electrónicos o de otra índole que permitan evitar la pérdida de expedientes judiciales en caso de incendio u otra clase de desastre y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.8. del Capítulo II de este informe).

¹⁴ Gobernabilidad en Suriname. Banco Interamericano de Desarrollo. Abril, 2001, pág. 119. <http://publications.iadb.org/handle/11319/1181?locale-attribute=en>

[58] En séptimo lugar, por lo que se refiere a procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la Alta Corte de Justicia manifestaron que no cuentan con un procedimientos de esta naturaleza, pero que existe un proyecto para crear un programa de gestión de causas. Sin embargo, agregaron que existe la dificultad de que este programa aún no tiene financiamiento. Sobre el particular, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere apoyar la implementación de un sistema integrado de gestión de calidad que contemple, entre otros, la asignación de causas y gestión de expedientes, a los fines de optimizar el trabajo de la Alta Corte de Justicia y contribuir al descongestionamiento de causas que existe en la actualidad. Para ello, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.9. del Capítulo II de este informe).

[59] En octavo lugar, en lo que corresponde a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, durante la visita *in situ*, los representantes de la Alta Corte de Justicia manifestaron que la mayoría del registro de casos se hace a mano y que la Corte no cuenta con sistemas o tecnologías modernas adecuadas que les facilite el cumplimiento de su labor jurisdiccional. Al respecto, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere tomar las medidas necesarias a los fines fortalecer a la Alta Corte de Justicia mediante la implementación de sistemas y tecnologías modernas para facilitar el cabal cumplimiento de sus funciones (ver recomendación 1.4.10. del Capítulo II de este informe).

[60] En noveno lugar, en lo concerniente a la difusión a la ciudadanía de sus objetivos y funciones, procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientación acerca de cómo realizar gestiones ante el mismo, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta indica que “*El Presidente de la Alta Corte es responsable de informar al público, cuando es necesario.*”¹⁵ Sin embargo, no se indica de qué manera comunica el Presidente de la Alta Corte esta información a la ciudadanía, ni cómo se determina cuándo es necesario. Cabe señalar que durante la visita *in situ*, tampoco se proporcionó información al respecto.

[61] Sobre el particular, el Comité advierte que la página Web del Gobierno de Suriname, si bien contiene información sobre las funciones y objetivos los órganos del Poder Ejecutivo, así como del Legislativo, no contiene una sección para el Poder Judicial. En efecto, en el único lugar en que aparece la Alta Corte de Justicia es en un gráfico la muestra bajo la estructura del Ministerio de Justicia y Policía (MJP), pero no se ofrece mayor información.

[62] Teniendo en consideración que la Alta Corte de Justicia es un órgano de orden constitucional, con función exclusiva de administración de justicia y que es quien se encarga de la sanción de actos de corrupción, el Comité estima que el Estado analizado podría considerar la creación de mecanismos para ofrecer información al público sobre los objetivos y funciones de la Alta Corte de Justicia, que les den a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de estos y que ofrezcan orientación acerca de cómo realizar gestiones ante la misma, incluida la creación de su propio sitio Web en el que se incluya esta información, junto con un buzón electrónico para quejas y sugerencias por parte de la ciudadanía, con protección de identidad en el caso de denuncias. Para ello, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.11. del Capítulo II de este informe).

[63] Sobre el particular, durante la visita *in situ*, el representante de la Barra de Abogados manifestó que no se contaba con herramientas para poder verificar en qué estado están los procedimientos legales, y que el Poder Judicial no contaba con un sitio Web para obtener información.

¹⁵ Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 9.

[64] En décimo lugar, por lo que se refiere a mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Estado analizado en su respuesta indica que “*En caso de un eventual reclamo, queja o alegato, es posible escribir una carta al Presidente de la Alta Corte de Justicia y, de ser necesario, se tomarán medidas.*” Sin embargo, no se indica que exista un procedimiento documentado para este propósito, ni se indica cuáles son los criterios por los cuales se consideraría necesario tomar medidas ni cuáles podrían ser éstas. Para ello, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.12. del Capítulo II de este informe).

[65] Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la Alta Corte de Justicia manifestaron también que, hasta donde ellos saben, no se han instituido procedimientos disciplinarios contra jueces. Se refirieron al artículo 142 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley de Organización Judicial. No existe ninguna otra disposición que desarrolle un sistema disciplinario ni contemple otra clase de sanciones y consecuencias para otra clase de comportamientos, tales como actos de corrupción¹⁶.

[66] Asimismo, manifestaron que tampoco se ha desarrollado el artículo 143 de la Constitución que establece que la ley regulará las consecuencias de suspensión y descargo de los miembros de la judicatura encargados de la administración de justicia y el Procurador General, por parte del Presidente de la Alta Corte de Justicia, cuando se dan las condiciones del artículo 142, párrafo 2, de la Carta Magna, citados anteriormente en la sección de existencia del marco jurídico.

[67] Finalmente, indicaron que se está trabajando en un proyecto de código de conducta para jueces y que ya está a punto de finalizar. Sobre el particular, el Comité considera que es de gran importancia que el Estado analizado considere desarrollar mecanismos de control a los fines de que pueda cumplir a cabalidad su función de sanción de actos de corrupción y lo tanto formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.4.13., 1.4.14., y 1.4.15. del Capítulo II de este informe).

[68] Por otra parte, el personal judicial y de apoyo administrativo de la Alta Corte de Justicia pertenecen al Ministerio de Justicia y Policía y sus procedimientos disciplinarios están previstos en la Ley de Personal. El Comité formulará observaciones en la sección correspondiente al análisis de ese órgano de control (ver recomendación 3.4.14. del Capítulo II de este informe).

[69] En décimo primer lugar, por lo que respecta a mecanismos de coordinación interinstitucional, el Comité toma nota de que el Estado analizado informa que durante la reunión anual de la Alta Corte de Justicia, la cual es atendida por el Procurador General, se toman decisiones respecto a la división de trabajo para el año siguiente. Dos veces al año, los jueces penales y una delegación de la Procuraduría Pública se reúnen para discutir aspectos concernientes a la administración de justicia penal. Durante la visita *in situ*, los representantes de la Alta Corte de Justicia informaron que no cuentan con mecanismos formales de coordinación interinstitucional con otros órganos de control con responsabilidad en la prevención, investigación, y persecución de actos de corrupción.

[70] Al respecto, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere fortalecer los mecanismos de coordinación y ayuda mutua en la detección, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción entre los órganos de control con responsabilidad sobre la materia, cuando

¹⁶ El artículo 12 de la Ley de Organización Judicial establece que: “*El Presidente de la Corte de Justicia está autorizado para amonestar al Vicepresidente, los miembros y sus alternos, y el Secretario de la Corte que incurran en negligencia de la dignidad de su oficio o de las actividades de su Oficina, ya sea a iniciativa propia o después de haber escuchado al Procurador General y a solicitud de éste.*”

corresponda. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.16. del Capítulo II de este informe)

[71] En décimo segundo lugar, el Comité advierte que no existe una obligación de la Alta Corte de Justicia de rendir cuentas ante el Estado y la ciudadanía. Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la Alta Corte de Justicia manifestaron que puesto que la Corte no maneja un presupuesto propio, no tienen cuentas que rendir ya que quien tiene que hacerlo es el Ministerio de Justicia y Policía, quien rinde cuentas ante la Asamblea Nacional.

[72] No obstante lo anterior, el Comité desea resaltar que la Alta Corte de Justicia es un órgano de naturaleza constitucional con la responsabilidad exclusiva de la administración de justicia, responsable además por la sanción de actos de corrupción, y por lo tanto el deber de rendir cuentas de su gestión jurisdiccional ante el Estado y la ciudadanía tiene pertinencia, independientemente de que maneje o no recursos humanos ni financieros. La Corte podría emitir un informe anual de gestión y hacerlo público a través de la página Web oficial de la República de Suriname y de otros medios de comunicación.

[73] Al respecto, el Comité considera de gran importancia que el Estado analizado establezca la obligación de la Alta Corte de Justicia de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre las funciones de administración de justicia que le confiere la Constitución, y hacer públicos estos informes. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.17. del Capítulo II de este informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[74] En primer lugar, por lo que respecta a los resultados relativos a las funciones jurisdiccionales de sanción de actos de corrupción que son de su competencia relativa a los últimos cinco años, el Comité toma nota de que la Alta Corte de Justicia no presentó información ni en la respuesta al cuestionario ni en la visita *in situ*.

[75] Sobre el particular, durante la visita *in situ* los representantes de la Alta Corte de Justicia informaron que no cuentan con un sistema informático que permita arrojar información estadística sobre el tema. Agregaron que toda la información se recoge y lleva a mano, y que requerirían tecnología y personal capacitado para poder desarrollar esa tarea.

[76] En ese sentido el Comité resalta la importancia de que la Alta Corte de Justicia, como órgano constitucional con la función exclusiva de la administración de justicia y como órgano encargado de sancionar actos de corrupción, lleve estadísticas de este tipo que permitan hacer un análisis integral sobre resultados, de manera que el Estado analizado pueda identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.4.18, 1.4.19. y 1.4.20. del Capítulo II de este informe).

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[77] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Alta Corte de Justicia del Poder Judicial en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[78] **El Estado analizado ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Alta Corte de Justicia como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[79] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 1.4.1 Reanudar a la brevedad el proceso de nombramiento de jueces, de manera que la Alta Corte de Justicia pueda cumplir a cabalidad su función de administración de justicia y de sanción de actos de corrupción, así como descongestionar el sistema y agilizar los procesos que han caído en mora judicial (ver secciones 1.2. y 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.2 Implementar un mecanismo que permita garantizar que el proceso de nombramiento de jueces no se obstaculice ni paralice, asegurando a la vez la transparencia, equidad y eficiencia de este proceso, de conformidad con los principios consagrados en la Convención (ver sección 1.2. y 3.2 del Capítulo II de este informe).
- 1.4.3 Implementar un manual de clasificación y descripción de funciones para los jueces de la Alta Corte de Justicia (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.4 Incluir específicamente el tema de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos de corrupción como parte del currículo de formación de jueces, y como parte del programa de capacitación continua para los jueces ya nombrados y el resto del personal de apoyo asignado a la Alta Corte de Justicia (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.5 Fortalecer a la Alta Corte de Justicia dotándole de los recursos presupuestarios que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles; y tomar las medidas pertinentes para que pueda contar con control sobre la determinación y manejo de sus recursos presupuestarios. (ver sección 1.2. y 3.2 del Capítulo II de este informe).
- 1.4.6 Posibilitar que la Alta Corte de Justicia pueda presentar y administrar su propio presupuesto anual, así como sus propios planes anuales (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.7 Fortalecer a la Alta Corte de Justicia dotándole de los recursos humanos administrativos y de apoyo que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles; y adoptar las medidas pertinentes para que pueda contar con control sobre la determinación de sus recursos humanos (ver sección 1.2. y 3.2 del Capítulo II de este informe).
- 1.4.8 Fortalecer a la Alta Corte de Justicia dotándole de instalaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones de administración de justicia, así como de un sistema electrónico o de cualquier otra índole que evite la pérdida de expedientes judiciales en caso de incendio o cualquier otro desastre (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.9 Elaborar procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas en la Alta Corte de Justicia, incluyendo manuales o guías relativas a las mismas; así como un sistema integrado de gestión de calidad, asignación de causas y gestión de expedientes (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.10 Fortalecer a la Alta Corte de Justicia mediante la implementación de sistemas y tecnologías modernas para facilitar el cabal cumplimiento de sus funciones de

administración de justicia y de sanción de actos de corrupción (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).

- 1.4.11 Introducir mecanismos para ofrecer información al público sobre los objetivos y funciones de la Alta Corte de Justicia, informarle sobre los procedimientos establecidos para el cumplimiento de estos y ofrecer información acerca de cómo realizar gestiones ante la misma, incluyendo la creación de su propio sitio Web que contenga esta información junto con un buzón electrónico para quejas y sugerencias por parte de la ciudadanía, con protección de identidad en el caso de denuncias (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.12 Desarrollar un mecanismo de atención a los reclamos, quejas o denuncias relacionadas con las funciones de la Alta Corte de Justicia y con el desempeño de los jueces, que establezca claramente cuál es el curso que se va a dar a estos reclamos, quejas o denuncias; cuáles serán las medidas y criterios que se tomarán para atenderlas, especialmente en los casos relacionados con actos de corrupción; (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.13 Desarrollar un código de conducta para jueces y personal judicial que contemple un mecanismo específico para su aplicación, especialmente en los casos relacionados con corrupción (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.14 Desarrollar procedimientos disciplinarios para jueces que contemplen sanciones, cuando sea aplicable, así como los mecanismos necesarios para su aplicación, especialmente en los casos relacionados con actos de corrupción (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.15 Considerar la adopción de medidas normativas para implementar el artículo 143 constitucional, de manera que queden reguladas, dentro de los procedimientos disciplinarios, las consecuencias de la suspensión y descargo de los miembros de la judicatura encargados de la administración de justicia y el Procurador General, por parte del Presidente de la Alta Corte de Justicia, cuando se dan las condiciones del artículo 142, párrafo 2, de la Constitución (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.16 Fortalecer los mecanismos de coordinación y ayuda mutua en la detección, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción entre los órganos de control con responsabilidad sobre la materia, cuando corresponda (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.17 Establecer la obligación para la Corte de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre las funciones de administración de justicia que le ha encargado la Constitución, y hacer públicos estos informes a través de la página Web de la República de Suriname y de otros medios de comunicación (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.18 Desarrollar información estadística respecto de los resultados relativos a las funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan responsabilidad penal para quienes resultan involucrados en las mismas, de manera que pueda conocerse el número total de decisiones adoptadas en relación con estos casos; cuántos resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; cuántas resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y cuántas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos,

en orden a identificar retos y recomendar, si corresponde, medidas correctivas (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).

1.4.19 Desarrollar información estadística respecto de los resultados relativos a las funciones de sanción de las prácticas corruptas que son de su competencia, que general responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, de manera que pueda conocerse el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público, en orden a identificar retos y recomendar, si corresponde, medidas correctivas (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).

1.4.20 Dotar a la Alta Corte de Justicia de la capacitación y recursos humanos y presupuestarios que se requieran a los fines de que pueda implementar un sistema moderno de informática que le permita recoger los datos y producir las estadísticas del caso, dentro de los recursos disponibles (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).

2. DEPARTAMENTO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[80] El Departamento de la Procuraduría República (DPP) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[81] En lo que corresponde a su naturaleza, el artículo 133 de la Constitución establece que el Procurador Judicial y los demás miembros de la Procuraduría Pública hacen parte del Poder Judicial, junto con otros oficiales judiciales designados por la ley.

[82] Asimismo, el artículo 131, párrafo 3 de la Constitución establece que estará prohibida cualquier interferencia en la investigación o procesamiento de casos, y en aquellos pendientes en el juzgado.

[83] Por cuanto a los objetivos y funciones de la Procuraduría Pública, el artículo 146 constitucional establece que los procesamientos públicos de la Alta Corte de Justicia serán ejercidos por el Procurador General o de parte de él. Asimismo, establece que el Procurador General representa al Estado ante la corte; que está a cargo tanto de la Procuraduría Pública como de la policía judicial; y que tiene la potestad de dar a los oficiales de policía instrucciones para la prevención, detección e investigación de actos punibles, si es que estima que esto es necesario en el interés de la buena justicia.

[84] El artículo 147 de la Constitución dispone que el Procurador General supervisa la correcta ejecución del trabajo de la Policía y que tiene la potestad de hacer cualquier propuesta que considere práctica al respecto.

[85] Igualmente, el Estado analizado en su respuesta informa que *“de conformidad con el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales, el Procurador General y los otros procuradores dan órdenes a las otras personas a cargo de la investigación de hechos punibles. Durante el*

*proceso, el procurador levanta cargos contra el acusado en representación del pueblo y pide a la corte que imponga la sanción correspondiente”.*¹⁷

[86] En ese mismo orden de ideas, el artículo 3 del Acta de Organización Judicial, el Procurador General, los fiscales, los procuradores principales, los procuradores públicos y los procuradores públicos alternos estarán a cargo de la ejecución de las sentencias dictadas por los jueces.

[87] Por lo que respecta a excepciones, el artículo 134 constitucional establece que la imposición de penas y medidas previstas por la ley está a cargo del Poder Judicial, quien tiene a su cargo la administración de justicia, sujeto a las excepciones previstas en la ley, que en lo correspondiente a detenciones podrá solamente relacionarse con ley militar y disciplinaria.

[88] En lo concerniente a los mecanismos de coordinación interinstitucional con otros órganos o poderes públicos, el Estado analizado en su respuesta informa que sostiene una reunión anual con la Alta Corte de Justicia para hacer consultas relacionadas con los aspectos técnicos del trabajo jurisdiccional en común. Asimismo, el Procurador General y el Ministro de Justicia y Policía y/o el Secretario Permanente sostienen reuniones periódicas.¹⁸

[89] En relación con la manera en que se toman las decisiones, el Estado analizado en su respuesta indica que estas son tomadas de conformidad con la legislación vigente y con los lineamientos dictados por el equipo presidido por el Procurador General.

[90] En lo tocante a la manera en que se nombran sus altas autoridades, el párrafo 2 del artículo 141 de la Constitución establece que los miembros del Poder Judicial encargados de la administración de justicia y el Procurador General serán designados por el Gobierno¹⁹, con la recomendación de la Alta Corte de Justicia; mientras que el párrafo 3 del mismo artículo establece que la ley determinará las otras condiciones para los nombramientos, así como las provisiones financieras para su beneficio y el de sus familiares supérstites.

[91] Al respecto, mediante Decreto Presidencial del 5 de octubre de 1976²⁰, reformado el 20 de junio de 2006²¹ el Ministerio de Justicia y Policía (MJP), se estableció el Reglamento de Selección y Formación de las Autoridades del Poder Judicial, que dispone que el Ministro de Justicia y Policía creará un Consejo para la selección y formación de los fiscales, conformado por representantes de la Alta Corte, la Procuraduría Pública, la Universidad de Suriname, la Barra de Abogados y el propio MJP, y desarrolla el proceso correspondiente (RAIO *Opleiding*).

[92] De conformidad con el citado artículo 141, párrafo 2 de la Constitución, los nombramientos de los miembros del Poder Judicial encargados de la administración de justicia y el Procurador General son vitalicios, mientras que el artículo 14.a d la Ley sobre la organización y composición del Poder Judicial establece que la edad de retiro de los procuradores es de 65 años.

¹⁷ Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 5.

¹⁸ *Ídem*, pág. 11.

¹⁹ El artículo 116 de la Constitución dispone que “1. El Presidente, el Vice-Presidente y el Consejo de Ministros conjuntamente conforman el Gobierno. El Vice-Presidente está a cargo del manejo diario del Consejo de Ministros, y como tal es responsable ante el Presidente. 2. El Gobierno es responsable ante la Asamblea Nacional”.

²⁰ Gaceta Oficial de la República de Suriname No. 54.

²¹ Gaceta Oficial de la República de Suriname No. 66.

[93] El Procurador General y los miembros del Poder Judicial encargados de la administración de justicia pueden ser separados de sus cargos por las razones establecidas en los artículos 142 y 143 de la Constitución.²²

[94] Por cuanto a los requisitos para ser Procurador General en la Alta Corte de Justicia, estos se encuentran en el artículo 141.1 de la Constitución, que dispone que para ser nombrado como miembro de la Judicatura a cargo de la administración de justicia, o Procurador General, uno debe haber alcanzado la edad de treinta años, ser ciudadano surinamés, y tener su residencia actual o principal en Suriname. Adicionalmente, el Reglamento de Selección y Formación de las Autoridades del Poder Judicial establece que los candidatos deberán contar con título de abogado, una maestría en Derecho y haber completado el curso de formación de personal del Poder Judicial, y de conformidad con el artículo 6 del Acta de Organización Judicial, el Procurador General de la Alta Corte de Justicia, el Jefe de los Procuradores Públicos, los procuradores públicos y los procuradores alternos, deberán haber alcanzado la edad de veinticinco años para poder ser nombrados y tener un título de abogado o maestría en derecho.

[95] En lo que respecta al resto del personal de la Procuraduría Pública, debido a que se encuentra bajo la estructura del Ministerio de Justicia y Policía (MJP), éste es seleccionado por dicho Ministerio de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Personal.

[96] Igualmente, por las razones arriba descritas, el personal de apoyo de la Procuraduría Pública se rige bajo el sistema de descripciones de funciones del gobierno (FISO).

[97] Con respecto a procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, el Estado analizado en su respuesta indica que cuentan con lineamientos relativos al encarcelamiento de sospechosos y políticas de procesamiento y sentencias²³. Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la Procuraduría Pública informaron que habían preparado manuales de gestión, con la cooperación de expertos de los Países Bajos, y que todos los procesos estaban descritos desde el momento en que los informes de policía son remitidos a la Procuraduría Pública entra en acción hasta el enjuiciamiento.

[98] En relación con la capacitación y formación de procuradores, el Estado analizado cuenta con un programa en colaboración con Holanda, llamado “*Fundación de Cooperación Jurídica entre Suriname y Holanda (SJSSN)*”, que coordinan las capacitaciones y suministran los manuales utilizados en los diferentes cursos y actividades durante los cinco años de su formación,

²² Artículo 142 de la Constitución: “1. Los miembros del Poder Judicial encargados de la administración de justicia y el Procurador General de la Alta Corte de Justicia son separados de sus cargos por el Gobierno a solicitud propia; al alcanzar la edad de retiro. 2. Las personas mencionadas en el primer párrafo pueden ser separadas de sus cargos por el Gobierno a propuesta de la Alta Corte de Justicia: cuando han sido puestos bajo restricción legal; en caso de desorden mental continuo y comprobado; cuando han sido sentenciados a detención irrevocable por haber cometido un acto punible; si se han declarado en bancarrota; cuando han obtenido una moratoria o se encuentran bajo custodia judicial por deudas civiles; en caso de mala conducta o inmoralidad serios o en el caso de negligencia continua y comprobada en el cumplimiento de sus funciones”.

Artículo 143 de la Constitución: “Si el Presidente de la Alta Corte de Justicia considera que una de las razones para el descargo es alguna de las mencionadas en el párrafo 2 del artículo 142, podrá suspender a la persona en cuestión y también podrá proveer un reemplazo temporal en esa oficina. La ley regulará las consecuencias de la suspensión y separación del servicio”.

²³ Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 9.

así como otros cursos de capacitación durante el año para otros procuradores y personal judicial/legal²⁴.

[99] El Estado analizado en su respuesta indica también que la Ley de Organización Judicial y la Ley de Personal establecen estándares de conducta para el Poder Judicial en General²⁵.

[100] Asimismo, con relación al control interno relativo a la manera en que se manejan los casos disciplinarios de sus funcionarios con respecto al cumplimiento de sus funciones, debido a que la Procuraduría Pública se encuentra bajo la estructura del Ministerio de Justicia y Policía, se rige bajo lo dispuesto en la Ley de Personal.

[101] En lo concerniente a la manera en que se garantizan los recursos de la Procuraduría Pública, éstos se prevén dentro del presupuesto del MJP, quien es quien está a cargo de su administración, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6, capítulo II, del Decreto de Descripción de Funciones de los Departamentos No. 58, del 10 de octubre de 1991.

[102] Finalmente, en por lo que respecta a la manera en que se suministra a los ciudadanos información acerca de los objetivos y funciones de la Procuraduría Pública, se da a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientación de cómo realizar gestiones ante el mismo, el Estado analizado en su respuesta informa que existe un procurador público nombrado y capacitado para suministrar información a la prensa cuando es necesario; que en casos mayores esto es llevado a cabo por el Procurador General y el Jefe de la Policía; y que aunque la Procuraduría no tiene su propio programa informativo en los medios de comunicación, el programa mensual a veces informa sobre temas que tienen que ver con la Procuraduría Pública, ya que ésta *“técnicamente forma parte del Ministerio de Justicia y Policía”*²⁶.

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[103] La Procuraduría Pública cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[104] En primer lugar, el Comité observa que el Estado analizado ha adoptado el Reglamento de Selección y Formación de las Autoridades del Poder Judicial, a cargo del Ministro de Justicia y Policía, que es quien hará la recomendación al Gobierno para el nombramiento de procuradores.

[105] De conformidad con este procedimiento, el Ministro de Justicia y Policía es responsable de integrar un Consejo de selección y formación del personal del Poder Judicial, que estará compuesto por dos representantes de la Alta Corte, uno de los cuales presidirá el Consejo; dos representantes de la Procuraduría Pública, uno de los cuales asumirá la vicepresidencia; un docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Suriname Anton de Kom; un abogado miembro de la Barra de Abogados y recomendado por la misma; y un representante del propio MJP. Estos nombramientos una duración de cinco (5) años, con la posibilidad de ser reelegidos una sola vez.

[106] En virtud del referido Reglamento, una vez al año, el Ministro de Justicia y Policía anunciará las vacantes en el Poder Judicial. Las partes interesadas remiten sus aplicaciones ante el Ministro, quien a su vez las remite al Consejo. El Consejo selecciona y envía la lista de los candidatos

²⁴ Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 8.

²⁵ Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 8.

²⁶ *Ídem*, pág. 9.

seleccionados y no seleccionados al Ministro Justo antes de completar el curso de entrenamiento de cinco años, el Consejo, acompañando los documentos relevantes, formulará una recomendación motivada ante el Ministro de Justicia y Policía con vista a la recomendación para el nombramiento del candidato como miembro alterno de la Corte o como procurador público alterno. El Ministro de Justicia y Policía tomará su decisión y elevará los nombres de los candidatos seleccionados para la consideración del Gobierno, quien de acuerdo a la Constitución hará los respectivos nombramientos.

[107] Sobre el particular, durante la visita *in situ*, la representante de la Procuraduría Pública manifestó que existe una demora en la designación de procuradores mediante la utilización del procedimiento previsto en Reglamento de Selección y Formación de las Autoridades del Poder Judicial, ya que el Consejo no se encuentra actualmente funcionando debido a que los términos de algunos de sus miembros han expirado y las vacantes no han sido cubiertas.

[108] Al respecto, agregó que sería de utilidad que la Procuraduría pudiera contar con más procuradores, especialmente personal con habilidades específicas para realizar investigaciones relacionadas con actos de corrupción. Teniendo en cuenta que la Procuraduría Pública es el órgano constitucional encargado de la investigar y procesar los actos de corrupción, el Comité considera de vital importancia que el Estado analizado considere reanudar el proceso de nombramiento de procuradores a la brevedad posible, garantizándole además que cuente con el número de procuradores necesarios y debidamente capacitados para cumplir cabalmente sus funciones de investigación y persecución de actos de corrupción (véase la recomendación 2.4.1. en el Capítulo II del presente informe).

[109] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con descripciones de funciones y manuales de clasificación de cargos, el Comité observa que si bien el personal administrativo de la Procuraduría Pública, por pertenecer al Ministerio de Justicia y Policía se rige por el manual de funciones y clasificación del Ejecutivo (FISO), no existe manual de clasificación ni descripciones de funciones para los procuradores²⁷. Al respecto, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.2. del Capítulo II de este informe).

[110] En tercer lugar, por lo que se refiere a la formación de procuradores, el Comité toma nota de que si bien se cuenta con el programa (RAIO *Opleiding*) que para estos fines prevé el Reglamento de Selección y Formación del Personal del Poder Judicial, durante la visita *in situ* los representantes de la Procuraduría Pública manifestaron que el tema de corrupción no se encuentra específicamente contemplado en este programa y que tampoco se capacita a los procuradores existentes en la materia. Teniendo en consideración que la Procuraduría Pública es el órgano encargado de investigar y procesar los actos de corrupción, el Comité considera de gran importancia contar procuradores capacitados y al día en los temas contemplados en la Convención, para lo cual el Estado analizado podría incluir el tema como parte del currículo del programa de formación de procuradores y como parte del programa de capacitación continua para los procuradores ya nombrados y para el resto del personal de apoyo de la Procuraduría Pública, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.3. del Capítulo II de este informe).

[111] En cuarto lugar, por lo que respecta a la manera en que se garantizan sus recursos de la Procuraduría Pública, en su respuesta al cuestionario el país analizado señaló que: *“Para los gastos diarios, la Procuraduría Pública cuenta con un presupuesto disponible. Los gastos mayores tales*

²⁷ En su documento de comentarios al proyecto de informe preliminar, el país analizado planteó lo siguiente: *“Además de las descripciones generales de puestos para los procuradores públicos como se menciona en el Código de Procedimientos Penales y la Constitución, respecto a los manuales de clasificación de puestos, hay varias leyes estatales (SB 2007 No. 130 y SB 2013 No. 113) sobre prestaciones financieras y sociales para los miembros del poder judicial y sus familiares.”*

*como sueldos, edificios y mueblería, están clasificados dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia y Policía. Estos fondos deberán ser solicitados mediante aplicación. Una vez al año, el Ministro de Justicia y Policía presentará su presupuesto, a través del Gobierno, ante la Asamblea Nacional para su aprobación.*²⁸

[112] Al respecto, el Comité toma nota de que la Procuraduría Pública no tiene autonomía sobre sus recursos presupuestarios. En ese sentido, el Comité desea resaltar la importancia de contar con un Poder Judicial independiente con suficientes recursos presupuestarios a los fines de que pueda cumplir a cabalidad sus funciones constitucionales de investigación y persecución de actos de corrupción y contribuir así al cumplimiento de los propósitos de la Convención. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.4. del Capítulo II de este informe).

[113] Cabe señalar también que ya desde el año 2001 el Banco Interamericano de Desarrollo, en su estudio *“Gobernabilidad en Suriname”*, había hecho referencia a esta situación. En efecto, al referirse a la independencia financiera del Poder Judicial expresó que *“Si bien la Constitución prevé que el Poder Judicial será independiente al establecer que no deberá haber ‘interferencia en casos bajo investigación o enjuiciamiento’ muchas decisiones son influenciadas debido a consideraciones presupuestarias y el presupuesto está enteramente controlado por el ejecutivo. Esto hace posible que pueda ejercitarse influencia política por el ejecutivo a través del control de los fondos: por ejemplo, si el ejecutivo no quiere que la Procuraduría inicie una investigación sobre alguna cierta materia, puede simplemente denegar la solicitud por parte del procurador de financiamiento para transportarse al sitio de la investigación o para los materiales necesarios para llevar a cabo su investigación”*.²⁹

[114] En quinto lugar, por lo que se refiere a la manera en que se contratan los recursos humanos administrativos y de apoyo de la Procuraduría Pública, estos funcionarios son contratados por el Ministerio de Justicia y Policía (MJP) de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Personal.

[115] Al respecto, durante la segunda ronda el Comité analizó los procedimientos de contratación de los servidores públicos y formuló recomendaciones puntuales al Estado analizado sobre la Ley de Personal y por lo tanto no se referirá a este procedimiento. Sin perjuicio de ello, el Comité considera pertinente que el Estado analizado considere asegurar que la Procuraduría Pública cuente con suficiente personal adecuadamente capacitado para llevar a cabo las tareas administrativas y de apoyo en la investigación y procesamiento de actos de corrupción (ver recomendación 2.4.5. del Capítulo II de este informe).

[116] En sexto lugar, en lo que se refiere a la investigación de actos de corrupción, durante la visita *in situ*, la representante de la Procuraduría Pública informó que las investigaciones se hacen a través de la policía, bajo la dirección de la Procuraduría. Sin embargo, agregaron que no a pesar de que existe un departamento de fraude dentro del Departamento de Policía, este Departamento no cuenta con personal que tenga los conocimientos suficientes para investigar actos de corrupción y que esto constituye una dificultad para su persecución. Al respecto, agregaron que haría falta una unidad anticorrupción de la policía, con personal suficientemente capacitado, para trabajar en coordinación con la Procuraduría Pública en la investigación y persecución de actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.6. del Capítulo II de este informe).

²⁸ Respuesta de Suriname al cuestionario, p. 10.

²⁹ Gobernabilidad en Suriname. Banco Interamericano de Desarrollo. Abril, 2001, pág. 119. <http://publications.iadb.org/handle/11319/1181?locale-attribute=en>

[117] En séptimo lugar, en lo que respecta a la coordinación interinstitucional, el Estado analizado, en su respuesta, informa que sostienen una reunión anual con la Alta Corte de Justicia para discutir los aspectos técnicos de su trabajo. Asimismo, indicaron que sostienen reuniones regulares con el Ministro de Justicia y Policía y/o el Secretario Permanente. Sin embargo, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere implementar mecanismos de coordinación interinstitucional directamente entre la Procuraduría Pública y otros órganos del Estado, a los fines de colaborar en la investigación y procesamiento de actos de corrupción. Al respecto, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.7. del Capítulo II de este informe).

[118] En ese mismo sentido, durante la visita *in situ*, el Comité pudo constatar que ni la Institución Suprema de Auditoría (SAI - *Rekenkamer*), que es el órgano constitucional encargado del control financiero del Estado; ni la Agencia Central de Auditoría (CLAD), quien es el auditor interno del Gobierno, tienen la obligación de dar traslado a la Procuraduría Pública de aquellos casos en que existan indicios de actos de corrupción. Al respecto, cabe señalar que en este momento las auditorías externas que serían responsabilidad de la Institución Suprema de Auditoría (*Rekenkamer*) están siendo realizadas por la Agencia Central de Auditoría (CLAD), que está sirviendo como auditoría interna y externa de los órganos del Estado y las instituciones paraestatales.

[119] A pesar de que este es un tema que será analizado en la sección correspondiente a la CLAD, es importante resaltar que siendo éste un órgano dependiente del Ministerio de Finanzas, cuando se encuentran indicios de hechos punibles en las auditorías la CLAD solamente tiene la obligación de notificar al Ministerio de Finanzas. A su vez, el Ministro de Finanzas, de considerarlo pertinente, notificará de esto al Ministerio de Justicia y Policía o a la Procuraduría Pública para su investigación y seguimiento. Sin perjuicio de las recomendaciones que se formularán en el capítulo correspondiente a la CLAD, el Comité considera importante que el Estado analizado considere establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre la Procuraduría Pública y los órganos de auditoría tanto interna como externa del Estado, asegurando que esta información pueda transmitirse directamente a la Procuraduría para su investigación y procesamiento, sin tener que pasar por los filtros de otros Ministerios (ver recomendación 3.4.7. del Capítulo II de este informe).

[120] En octavo lugar, en lo concerniente a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, el Estado analizado en su respuesta manifiesta que sostiene reuniones regulares entre los procuradores y que *“En estas reuniones, temas relacionados con aspectos institucionales y/o tecnologías modernas para facilitar las tareas, también son discutidos de ser necesario”*.³⁰

[121] Al respecto, durante la visita *in situ*, la representante de la Procuraduría informó que tienen entre sus planes la implementación de un *software* para que también los oficiales de justicia puedan acceder a la información sobre los procedimientos y se les facilite solicitarla. Sin embargo, esto es un plan para el futuro que sería implementado cuando se muden a otro edificio y que esto llevaría su tiempo. Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere suministrar a la Procuraduría Pública los recursos presupuestarios necesarios a los fines de que pueda implementar a la brevedad tecnologías modernas para facilitar las tareas, sobre todo el flujo de información interna relativa a la persecución e investigación de actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.8. del Capítulo II de este informe).

[122] En noveno lugar, en lo relacionado con los mecanismos de control interno para dar curso a reclamos, quejas y denuncias, el Estado analizado en su respuesta manifiesta que *“El Procurador General considera todos los posibles reclamos, quejas o denuncias que recibe del público o de otras autoridades. De ser necesario, se toman medidas, ya sea internas (si no son serias), o con base en la*

³⁰ Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 9.

Ley de Personal. Sobre el particular, durante la visita *in situ*, el Comité pudo constatar que no existe un procedimiento documentado para la recepción y procesamiento de reclamos, quejas y denuncias,

[123] Al respecto, el Comité estima necesario que el Estado analizado considere desarrollar un mecanismo de atención a los reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría Pública y con el desempeño de los procuradores y demás personal judicial de este órgano constitucional, que establezca claramente cuál es el curso que se va a dar a estos reclamos, quejas o denuncias; cuáles serán las medidas y criterios que se tomarán para atenderlas; y cuáles serán las consecuencias, especialmente en los casos relacionados con actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.9. del Capítulo II de este informe).

[124] En ese mismo sentido durante la visita *in situ* el Comité pudo también constatar que no existe un código de conducta susceptible de aplicación coercitiva para procuradores y funcionarios de la Procuraduría Pública. El Comité considera pertinente que el Estado analizado considere desarrollar un código de conducta aplicable a los procuradores y funcionarios de la Procuraduría Pública que contemple un mecanismo específico de aplicación, en particular en casos relacionados con corrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.10. del Capítulo II de este informe).

[125] Por lo que respecta al procedimiento disciplinario contemplado en la Ley de Personal, el Comité se referirá al mismo en la sección correspondiente al Ministerio de Justicia y Policía, ya que esta Ley es aplicable a ambos órganos de control superior (ver recomendación 3.4.14. del Capítulo II de ese informe).

[126] En décimo lugar, en lo concerniente a la difusión a la ciudadanía de sus objetivos y funciones, procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientación acerca de cómo realizar gestiones ante el mismo, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta indica que ³¹:

[127] *“Hay un procurador público entrenado para proporcionar información a la prensa cuando es necesario. En casos mayores, de ser necesario, corresponde al Procurador General y al Jefe de la Policía informar al público”.*

[128] *“A pesar que la oficina no cuenta con su propio programa informativo en los medios de comunicación, el programa del Ministro de Justicia en ocasiones se refiere a temas que tienen que ver con la oficina del Procurador General. Técnicamente, es parte del Ministerio de Justicia”.*

[129] Sobre el particular, el Comité advierte que la Procuraduría Pública no cuenta con los medios para difundir a la ciudadanía la información de la referencia. De hecho, la página Web del Gobierno de Suriname, no contiene una sección para la Procuraduría Pública y el único lugar en donde aparece es en un gráfico la muestra bajo la estructura del Ministerio de Justicia y Policía (MJP), y como puede apreciarse, el Estado analizado en su respuesta considera a la Procuraduría Pública como una dependencia del Ministerio de Justicia, a pesar de que la Procuraduría Pública es un órgano de orden constitucional que debe gozar de autonomía.

[130] Teniendo en consideración que la Procuraduría Pública es el órgano de control con funciones de investigación y persecución de hechos punibles, incluidos los actos de corrupción, el Comité estima que el Estado analizado podría considerar la introducción de mecanismos que ofrezcan información a la ciudadanía sobre los objetivos y funciones de la Procuraduría Pública, le

³¹ Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 9.

informen sobre los procedimientos establecidos para el cumplimiento de estos y le ofrezca orientación acerca de cómo realizar gestiones ante la misma, incluyendo la creación de su propio sitio Web en el que se incluya esta información junto con un buzón electrónico para quejas y sugerencias por parte de la ciudadanía, con protección de identidad para los denunciantes. Para ello, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.11. del Capítulo II de este informe).

[131] Finalmente, el Comité advierte que no existe una obligación de la Procuraduría Pública de rendir cuentas ante el Estado y la ciudadanía sobre su función constitucional de investigación y procesamiento de hechos punibles. En efecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la Procuraduría Pública manifestaron que el Ministerio de Justicia y Policía rinde su informe ante la Asamblea Nacional, quien podrá hacer preguntas sobre la gestión de la Procuraduría Pública, de considerarlo pertinente.

[132] Teniendo en consideración que la Procuraduría Pública es un órgano de orden constitucional que tiene entre sus responsabilidades la investigación y persecución de hechos punibles, incluidos los actos de corrupción, el Comité estima necesario que el Estado analizado considere establecer la obligación de que este órgano rinda cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre su gestión, directamente y sin intermediarios. Para ello, la Procuraduría Pública podría emitir un informe anual de gestión y hacerlo público a través de la página Web oficial de la República de Suriname y de otros medios de comunicación que estime pertinentes. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.12. del Capítulo II de este informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[133] En primer lugar, en lo referente a funciones de de detección e investigación de las prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan involucrados en las mismas correspondientes a los últimos cinco años, el Estado analizado en su respuesta presenta la siguiente información³²:

[134] *“El Departamento de Enjuiciamientos Públicos ha presentado exitosamente ante la Corte algunos casos penales de funcionarios públicos que han actuado en violación de sus deberes oficiales”.*

[135] *“En el período 2009-2013, la oficina también ha liderado (la investigación) de algunos de éstos. Algunos fueron presentados ante la Corte y otros (menos severos) fueron disciplinarios y fueron resueltos con un descargo condicional.”*

[136] *“Hubieron tres casos mayores enjuiciados, de los cuales uno de los sospechosos ha sido ya condenado. Otro de los sospechosos fue absuelto. El otro aún está pendiente. El último mencionado es un caso en el cual tres personas de alto rango (incluido un director) de una compañía paraestatal fueron aprehendidos y procesados”.*

[137] Sobre el particular, el Comité toma nota de que si bien el Estado analizado informa que la Procuraduría Pública ha llevado a cabo funciones de detección, investigación y persecución de actos de corrupción, esta información no está desagregada por año ni se ofrece mayor detalle. Asimismo, durante la visita *in situ*, la representante de la Procuraduría Pública manifestaron que si bien contaban con estadísticas generales, no contaban con información desagregada específicamente de actos de corrupción. Con base en la información disponible, el Comité considera que no es posible efectuar un análisis integral sobre el tema y formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.13. del Capítulo II de este informe).

³² Respuesta de Suriname al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 12-13.

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[138] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Procuraduría Pública en los acápite anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[139] **El Estado analizado ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Procuraduría Pública como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[140] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Fortalecer la Procuraduría Pública suministrándole, dentro de los recursos disponibles, suficientes procuradores, en especial aquellos con habilidades especializadas para investigar actos de corrupción (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Implementar un manual de clasificación y descripción de funciones para los procuradores (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Incluir específicamente el tema de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos de corrupción como parte del currículo de formación de procuradores, y como parte del programa de capacitación continua para los procuradores ya nombrados y para el resto del personal de apoyo de la Procuraduría Pública (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Fortalecer a la Procuraduría Pública dotándole de los recursos presupuestarios que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles, y tomar las medidas pertinentes para que pueda contar con control sobre la determinación y manejo de sus recursos presupuestarios (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.5. Fortalecer a la Procuraduría Pública dotándole del personal de apoyo y administrativo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles, y tomar las medidas pertinentes para que pueda contar con control sobre la determinación y manejo de sus recursos humanos (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.6. Crear dentro del Departamento de Policía una unidad anticorrupción con personal suficientemente capacitado, que trabaje en coordinación con la Procuraduría Pública en la investigación y persecución de actos de corrupción (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.7. Establecer los mecanismos formales de coordinación y ayuda mutua en la detección, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción entre la Procuraduría Pública y los órganos de control con responsabilidad sobre la materia, cuando corresponda (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe);
- 2.4.8. Fortalecer a la Procuraduría Pública, dentro de los recursos disponibles, dotándola de sistemas y tecnologías modernas para facilitar el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de actos de corrupción (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).

- 2.4.9. Desarrollar un mecanismo de atención a los reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría Pública y con el desempeño de los procuradores, que establezca claramente cuál es el curso que se va a dar a estos reclamos, quejas o denuncias; cuáles serán las medidas y criterios que se tomarán para atenderlas, en especial en lo relativo a actos de corrupción; (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.10. Desarrollar un código de conducta para el personal de la Procuraduría Pública que contemple un mecanismo específico para su aplicación, especialmente en los casos relacionados con corrupción (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.11. Introducir mecanismos para ofrecer información al público sobre los objetivos y funciones la Procuraduría Pública, informarle sobre los procedimientos establecidos para el cumplimiento de estos y ofrecer información acerca de cómo realizar gestiones ante el mismo, incluyendo la creación de su propio sitio Web que contenga esta información junto con un buzón electrónico para quejas y sugerencias por parte de la ciudadanía, con protección de identidad en el caso de denuncias (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.12. Establecer la obligación de la Procuraduría Pública de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre las funciones de investigación y persecución de hechos punibles que le ha señalado la Constitución, y hacer públicos estos informes a través de la página Web de la República de Suriname y de otros medios de comunicación que estime pertinentes (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.13. Completar y desglosar la información estadística referida a la investigación de los actos de corrupción, de manera que incluya datos que permitan establecer de manera clara y desagregada por año y tipo de delito, el número total de investigaciones iniciadas, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, en orden a identificar retos y recomendar, si corresponde, medidas correctivas (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).

3. MINISTERIO DE JUSTICIA Y POLICÍA (MJP)

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[141] El Ministerio de Justicia y Policía (MJP) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[142] El MJP es un órgano del Poder Ejecutivo cuyas funciones están descritas en el Artículo 6, capítulo II, del Decreto de Descripción de Funciones de los Departamentos No. 58, del 10 de octubre de 1991.³³ Entre sus atribuciones se encuentran la facilitación de la organización judicial y asuntos de

³³ Las funciones especiales del Ministerio de Justicia y Policía están descritas en el “Decreto sobre la Descripción de Funciones de los Departamentos” (S.B. [Gaceta Oficial] 1991, No. 58), las cuales se listan a continuación:

Facilitar:

recursos humanos del Poder Judicial, así como la facilitación de la representación del Estado de Suriname ante los tribunales. El MJP lleva a cabo actividades de prevención de la corrupción. El Comité concentrará el análisis de este órgano en las funciones de apoyo al funcionamiento del Poder Judicial referidas en este párrafo, así como a sus actividades de prevención de la Corrupción.

[143] En lo que respecta a la manera en que se toman las decisiones, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP manifestaron que éstas son unipersonales, por el Ministro de Justicia y Policía o los Secretarios Permanentes o Subsecretarios Permanentes, dependiendo de la materia.

[144] En relación con la previsión de los cargos de sus máximas autoridades, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP informaron que el Ministro de Justicia y Policía es nombrado por el Presidente de la República. Se trata de un cargo es de libre nombramiento y remoción y, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 123 de la Constitución, los Ministros responden al Presidente de la República, quien es la instancia competente par exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo.

[145] Por otra parte, el Estado analizado informó que los Directores y Jefes departamentales del MJP son nombrados por el Presidente.

[146] Por cuanto a la manera en que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP pusieron de presente que estos nombramientos se llevan a cabo de conformidad con la Ley de Personal.

[147] En lo correspondiente a mecanismos de control interno, el proceso disciplinario de sus funcionarios se encuentra previsto en la Ley de Personal.

[148] Igualmente, en lo concerniente a manuales en que se describen las funciones del personal a su servicio, el Estado analizado cuenta con un sistema de descripción de funciones denominado FISO³⁴.

[149] En lo relativo a la implementación de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP informaron que cuentan con un sistema para Secretarios Permanentes denominado DECOS; con el sistema FISO de clasificación de puestos y descripción de funciones del personal; un sistema financiero coordinado por el Ministerio de Finanzas; y que además cuentan con un Departamento de Automatización que se encarga de la implementación de nuevas tecnologías.

[150] En lo tocante a la difusión de sus objetivos y funciones, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP pusieron de presente que tienen un Departamento de Comunicación Externa cuya función es informar al público, que participan en ferias educativas y que cuentan con una página Web.

-
- a. la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales;
 - b. la preparación, realización y revisión de regulaciones relativas a materia constitucional;
 - c. la elaboración de legislación y suministrar asesoría legal para el beneficio del Estado;
 - d. la organización judicial y temas de personal del Poder Judicial;
 - e. la representación del Estado de Suriname ante los tribunales;
 - f. la introducción, persecución y ejecución de sanciones;
 - g. políticas concernientes a delincuentes, incluyendo rehabilitación social;
 - h. políticas concernientes a la admisión, acomodo, deportación y extradición de extranjeros;
 - i. asistencia legal social;

³⁴ *Ídem*, pág. 9.

[151] Por cuanto a la manera en que se garantizan los recursos presupuestales para su funcionamiento, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP manifestaron que el Ministerio presenta una propuesta al Ministerio de Finanzas, quien lo incluye en el proyecto de presupuesto para la aprobación de la Asamblea Nacional.

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[152] El Ministerio de Justicia y Policía (MJP) cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[153] En primer lugar, en lo que concierne a sus funciones y objetivos, el Comité toma nota de que el Artículo 6, capítulo II, del Decreto de Descripción de Funciones de los Departamentos No. 58, del 10 de octubre de 1991 establece entre sus atribuciones la organización judicial y los asuntos de recursos humanos del Poder Judicial, y es el órgano del Poder Ejecutivo que tiene la tarea de asegurar el buen funcionamiento del Poder Judicial.

[154] Como ha quedado registrado en los capítulos correspondientes a la Alta Corte de Justicia y la Procuraduría Pública, que juntos conforman el Poder Judicial, de conformidad con el Reglamento de Selección y Formación de las Autoridades del Poder Judicial, el Ministro de Justicia tiene a su cargo el funcionamiento del Consejo para la selección y formación de los magistrados, para lo cual nombrará representantes de la Alta Corte de Justicia, la Procuraduría Pública, la Universidad de Suriname, la Barra de Abogados y el propio MJP. Asimismo, el Ministro de Justicia y Policía está a cargo de dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo de Selección y de presentar los candidatos a jueces y procuradores que han concluido su formación para la consideración del Consejo de Ministros y el Presidente de la República, quienes efectuarán los nombramientos.

[155] Sin embargo, tal y como se puso de presente en las secciones correspondientes a la Alta Corte de Justicia y a la Procuraduría Pública, ambos órganos manifestaron que les hace falta un mayor número de jueces y procuradores. Al respecto, durante la visita *in situ*, informaron también que el proceso de selección de jueces y de procuradores está en este momento paralizado debido a que los términos de todos los integrantes del Consejo de selección y formación del personal del Poder Judicial han concluido, en algunos casos desde hace dos años, sin que el Ministerio de Justicia y Policía, como órgano responsable del funcionamiento del Comité de Selección, haya designado reemplazos.

[156] Al respecto, el Comité considera de gran importancia que el Ministro de Justicia y Policía nombre a la brevedad a los miembros del Consejo de Selección y reanude el proceso de nombramientos de jueces y procuradores, asegurando que tanto la Alta Corte de Justicia y la Procuraduría Pública cuenten con el personal suficiente a los fines de dar cabal cumplimiento a sus funciones, incluidas las de detección, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción. Asimismo, resalta la importancia de que este proceso no sufra demoras ni interrupciones.

[157] Sin perjuicio de las recomendaciones que al respecto ha formulado en esas secciones, teniendo en consideración que es responsabilidad del MJP el velar porque el buen funcionamiento del Poder Judicial y que es el órgano que tiene a su cargo el control del Comité de Selección y Formación de funcionarios del Poder Judicial, el Comité considera de vital importancia que se nombren los miembros del Comité de Selección y se de curso a los nombramientos pendientes, a los fines de asegurar que los órganos del Poder Judicial cuenten con suficientes jueces y procuradores a los fines de estar en condiciones de cumplir cabalmente con sus funciones, incluyendo las de

investigación, persecución y sanción de actos de corrupción, y para ello formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.4.1, 1.4.2., 2.4.1., 2.4.2., 3.4.1. y 3.4.2. del Capítulo II de este informe).

[158] En segundo lugar, en relación con sus funciones de administrador del presupuesto y los asuntos de personal de la Alta Corte de Justicia y de la Procuraduría Pública, en las secciones correspondientes al análisis de estos órganos el Comité observó que ambos órganos manifestaron entre sus dificultades que tienen que solicitar autorización previa del MJP para efectuar cualquier desembolso de su propio presupuesto, desde la compra de materiales de oficina hasta la capacitación, transportación y financiamiento necesario para efectuar investigaciones, incluidas las de casos de corrupción, lo que constituye un obstáculo para el cabal cumplimiento de sus funciones.

[159] Sobre el particular, el Comité toma nota de que si bien es común en la mayoría de los Estados parte que exista un órgano administrativo que se ocupe de los asuntos financieros y de recursos humanos de las ramas judiciales, en el caso de Suriname los órganos del Poder Judicial tienen que solicitar previa autorización de un órgano del Ejecutivo para poder disponer de su propio presupuesto. Al respecto, el Comité considera que si bien es prerrogativa del Estado analizado de mantener la supervisión del presupuesto del Poder Judicial bajo el MJP u otro órgano que considere pertinente, sería recomendable que considerara tomar medidas para eliminar el requisito de autorización previa del MJP, y al mismo tiempo considerar establecer la obligación de los órganos del Poder Judicial de rendir informes financieros sobre la utilización de sus recursos presupuestarios. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.3. del Capítulo II de este informe).

[160] En tercer lugar, en relación con su tarea de prevención de la corrupción, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta manifestó que a través de su Departamento de Relaciones Internacionales elabora planes para la prevención de actos de corrupción en la administración pública; así como para proveer capacitación a Secretarios Permanentes, jefes de departamento y/o otros oficiales a los efectos de mejorar la calidad de su trabajo y los estándares de ética. Igualmente, manifestó que proveen capacitación sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción; formulan recomendaciones para implementar un plan maestro anticorrupción; proveen materiales de capacitación, manuales y guías para la prevención, detección y manejo de casos de corrupción; y colaboran con otros comités directivos en temas anticorrupción³⁵

[161] Sin perjuicio de ello, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP pusieron de presente que no existe una base legal ni un mandato específico que atribuya al MJP ni a ningún otro órgano funciones de prevención de la corrupción en el Estado analizado, y que si bien este Ministerio está llevado a cabo actividades y capacitaciones sobre el tema a través de su Departamento de Relaciones Internacionales y su Departamento de Fraudes, esto ha sido de manera voluntaria y dirigida principalmente a las altas autoridades del MJP.

[162] Teniendo en consideración la importancia que las funciones de prevención de la corrupción tienen para que el Estado analizado pueda cumplir con los propósitos de la Convención, el Comité estima pertinente que se considere tomar las medidas normativas necesarias a los fines de encomendar oficialmente la función de prevención de la corrupción ya sea al MJP o al órgano que considere pertinente, de manera que exista un órgano con un mandato específico para este propósito. Para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.4. del Capítulo II de este informe).

[163] En ese sentido, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP manifestaron que el Departamento de Relaciones Internacionales, que es quien se encuentra realizando varias actividades de prevención de la corrupción, cuenta con solamente cuatro funcionarios, lo que dificulta el cabal cumplimiento de las funciones anticorrupción encomendadas a ellos por el MJP. Al respecto, el

³⁵ *Ídem*, pág. 5.

Comité considera importante que el órgano que el Estado designe oficialmente para realizar las tareas de prevención de la corrupción, ya sea el MJP u otro que considere pertinente, cuente con suficientes recursos humanos y financieros a los fines de poder cumplir cabalmente con su función. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.5. del Capítulo II de este informe).

[164] En cuarto lugar, el Estado analizado no presentó información en su respuesta relativa a la coordinación interinstitucional con otros órganos de control con funciones de prevención, detección, investigación o sanción de actos de corrupción, para armonizar funciones y colaborar en el desarrollo de las tareas. Durante la visita *in situ*, el Comité pudo constatar que los otros órganos de control analizados no contaban con mecanismos formales de coordinación con el MJP. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere implementar mecanismos de coordinación interinstitucional entre el MJP y otros órganos de control con funciones de prevención, detección, investigación o sanción de actos de corrupción para facilitar el cumplimiento de los propósitos de la Convención y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.6. del Capítulo II de este informe).

[165] En ese sentido, y en atención al papel que el MJP tiene de velar por el buen funcionamiento de los órganos del Poder Judicial, especialmente en lo que tiene que ver con la implementación de los propósitos de la Convención, tal y como ha quedado registrado en la sección correspondiente a la Procuraduría Pública, durante la visita *in situ* el Comité tomó nota de que no existe una obligación de que la Agencia Central de Auditoría (CLAD) de traslado a la Procuraduría Pública de aquellos casos en los cuales el resultado de las auditorías realizadas por este órgano muestre indicios de responsabilidad penal, incluidos aquellos resultantes de posibles hechos de corrupción. Al respecto, los representantes tanto de la Procuraduría como de la CLAD, informaron que este último órgano únicamente tiene la responsabilidad de informar al Ministro de Finanzas, quien de considerarlo pertinente lo notificará al Ministro de Justicia y Policía, quien a su vez tomará la decisión de darle curso o no a la Procuraduría.

[166] El Comité resalta la importancia de implementar un mecanismo formal de coordinación entre la CLAD, el Ministerio de Finanzas, el MJP y la Procuraduría, a los fines de que la CLAD pueda dar curso directamente a la Procuraduría Pública de aquellos casos que muestren indicios de hechos de corrupción, para su investigación y procesamiento, sin tener que pasar por los filtros del Ministerio de Finanzas y el MJP. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.7. del Capítulo II de este informe).

[167] En quinto lugar, en lo correspondiente a mecanismos de coordinación para obtener el apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus funciones, durante la visita *in situ* los representantes del MJP manifestaron que están en contacto con una de las organizaciones de la sociedad civil para realizar cursos de concientización relacionados con el tema de corrupción. Sin embargo, no se trata de un mecanismo formal. Al respecto, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere establecer mecanismos formales de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de temas relacionados con corrupción, a los fines de obtener su apoyo en la implementación de los propósitos de la Convención, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.8. del Capítulo II de este informe).

[168] Al respecto, cabe mencionar que durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*”, manifestaron que no existen mecanismos formales de participación de la sociedad civil en la gestión pública, que no hay seguimiento ni monitoreo, y que no existe un plan nacional para ello.

[169] En sexto lugar, en lo que tiene que ver con la manera en que se adoptan sus decisiones, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ* los representantes del MJP pusieron de presente que

a nivel Ministerial el Ministro o el Secretario Permanente tomarán sus decisiones unipersonalmente después de efectuar las consultas con los correspondientes Departamentos. Sin embargo, indicaron también que no existen procedimientos reglamentados que determinen cómo se toman esas decisiones, y que por tanto no cuentan con procedimientos de apelación o revisión sobre las mismas. Al respecto, el Comité estima importante que el Estado analizado considere regular los procedimientos de toma de decisiones en el MJP, que contemplen asimismo procedimientos de revisión o apelación y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.9. del Capítulo II de este informe).

[170] Al respecto, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, la organización de la sociedad civil, “*Stiching Projecta*”, puso de presente que no hay procedimientos uniformes dentro del ámbito del Gobierno para adoptar decisiones lo que ocasiona inconsistencias en el manejo de los recursos públicos y abre la oportunidad para posibles actos de corrupción.

[171] En séptimo lugar, por lo que respecta a la manera en que se determinan sus recursos humanos, el Comité observa que este procedimiento está basado en la Ley de Personal. Debido a que este fue un tema que fue objeto de análisis durante la segunda ronda y sobre el cual se formularon recomendaciones, el Comité no se referirá a ello.

[172] Sin perjuicio de ello, y teniendo en consideración que en consideración que el MJP es el órgano encargado de proveer a la Alta Corte de Justicia y la Procuraduría Pública del personal de apoyo necesario, y que ambos órganos manifestaron entre sus dificultades no contar con personal suficiente para el cabal cumplimiento de sus funciones, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.10. del Capítulo II de este informe).

[173] En octavo lugar, en lo que tiene que ver con la exigencia del cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos, durante la visita *in situ*, el Comité pudo observar que la mayoría de los Jefes de Departamento del MJP eran interinos. Al respecto, los representantes del MJP informaron que esto se debe a que por una parte, de acuerdo al sistema de selección de personal los candidatos deben pasar por un período probatorio de un año en donde se consideran “interinos” antes de ser considerados permanentes; pero que, por otra parte, si no cumplen los requisitos para ocupar el puesto pueden ser nombrados de todas maneras a título de “interino” hasta que los cumplan o hasta que se presente un candidato calificado. Si en un año no se presenta un candidato calificado, entonces el Jefe Interino se convierte automáticamente en permanente. Sin perjuicio de las recomendaciones que se le formularon al Estado analizado durante la segunda ronda, en donde se analizaron los sistemas de contratación de funcionarios públicos en general, el Comité considera que el cumplimiento la exigencia del cumplimiento de los requisitos para ocupar un cargo público es un elemento esencial para el llevar a cabo los propósitos de la Convención y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.11. del Capítulo II de este informe).

[174] En noveno lugar, por cuanto a manuales de descripción de funciones, el Comité toma nota de que el Estado analizado cuenta con un sistema de descripción de funciones y escala de sueldo denominado FISO. Sin embargo, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP indicaron que este sistema no es aplicable a los funcionarios del Poder Judicial ni a los altos funcionarios del MJP. En lo concerniente a los órganos del Poder Judicial, el Comité ya se ha pronunciado en las secciones correspondientes a la Alta Corte de Justicia y a la Procuraduría Pública. Sin embargo, el Comité desea resaltar la necesidad de que los altos funcionarios del MJP cuenten con descripciones de funciones con su correspondiente escala de sueldos y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.12. del Capítulo II de este informe).

[175] En décimo lugar, en lo que corresponde a sistemas de gestión y de control de calidad, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del MJP manifestaron que no

cuentan con procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas ni con un sistema de gestión de calidad, y que se encuentran en proceso de desarrollarlos. El Comité estima que existe la necesidad de que el MJP cuente con estos procedimientos a los efectos de lograr una mejor gestión y prevenir oportunidades de corrupción. Para ello, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.13. del Capítulo II de este informe).

[176] Cabe anotar que durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*”, puso de manifiesto que no existen en los Ministerios procedimientos documentados ni estándares de operaciones para el desarrollo de las tareas, lo dificulta la transparencia y la eficiencia en su funcionamiento.

[177] En décimo primer lugar, en relación con la sujeción del personal a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del MJP informaron que el sistema disciplinario del personal del Ministerio, que comprende también a una parte del personal del Poder Judicial como se ha explicado en las secciones correspondientes a la Alta Corte de Justicia y a la Procuraduría Pública, se rige por lo dispuesto en la Ley de Personal.

[178] Sobre el particular, el Comité toma nota de que la Ley de Personal establece sanciones disciplinarias en su artículo 61, titulado “Enumeración de las sanciones disciplinarias”. Sin embargo, el Comité advierte de que dicho artículo únicamente contempla sanciones para casos de negligencia en el cumplimiento de las funciones³⁶, y que la Ley no desarrolla un procedimiento que defina, entre otros, cómo se llevarán a cabo los sumarios administrativos, quién será específicamente la autoridad encargada de llevarlos a cabo, como tampoco contempla recursos de reconsideración o de apelación. Al respecto, durante la visita *in situ* los representantes del MJP indicaron que las investigaciones son realizadas por la policía o la CLAD, pero que no hay un ente interno que se ocupe de las investigaciones y sumarios administrativos. Teniendo en consideración la importancia de que el MJP cuente con suficientes controles internos respecto a la responsabilidad por las actuaciones de sus funcionarios, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.14. del Capítulo II de este informe).

[179] En décimo segundo lugar, en lo referente a los mecanismos de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del MJP pusieron de presente que las quejas y denuncias se toman con gran seriedad y que se investigan y se toman medidas apropiadas, involucrando a la policía de ser necesario. Sin embargo, también manifestaron que no se cuenta con un procedimiento reglamentado para atender esta clase de reclamos, quejas y

³⁶ El párrafo 1 del artículo 61 establece que: “*Un servidor público que es culpable de negligencia en sus funciones podrá ser sujeto a una de las siguientes sanciones disciplinarias: a) expresión de insatisfacción; b) reprimenda; c) servicio punitivo consistente en la obligación de efectuar servicio extraordinario por un máximo de quince días, durante dos horas por día; d) reducción de vacaciones, consistiendo en pérdida máxima de la mitad de tiempo de licencia por año calendario; e) multa, consistiendo en la obligación de pagar un monto de máximo un mes de sueldo, o de cuatro veces el sueldo semanal; f) congelamiento de sueldo consistente en la pérdida del derecho a la promoción de conformidad con el párrafo 4, del artículo 24, y de los incrementos periódicos por un período máximo de tres años; g) reducción de la antigüedad en la escala salarial, consistente en la pérdida de uno o más incrementos periódicos; h) suspensión, por un período máximo de tres meses; i) democión, consistente en la reducción en el rango; j) despido*”.

El párrafo 2 del artículo 61 establece que: “*Un servidor público también es considerado negligente en el empleo cuando: a) ya sea que antes de iniciar su servicio haya recurrido al engaño para motivar a la autoridad competente a que lo contrate, o para obtener ciertos términos de empleo; b) o en el curso de su empleo ha sido sentenciado judicialmente a prisión como resultado de un delito intencional tenga o no relación con su empleo*”.

denuncias por parte de la ciudadanía. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.15. del Capítulo II de este informe)

[180] Asimismo, el Comité advierte que la página Web del MJP no cuenta con un buzón de quejas y sugerencias para el público, ni ninguna información sobre cómo presentarlas ni ante quién. El Comité considera que es importante que el Estado analizado considere colocar un buzón electrónico en la página Web del MJP que permita a la ciudadanía presentar reclamos, quejas y denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del MJP y con el desempeño de sus funcionarios, contemplando protección de la identidad. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.16. del Capítulo II de este informe).

[181] Sobre el particular, cabe resaltar que durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*” puso de presente que no existe un mecanismo independiente para presentar quejas y denuncias con protección de la identidad³⁷.

[182] En décimo tercer lugar, en relación con la manera en que se da a conocer a la ciudadanía información sobre sus objetivos y funciones, procedimientos establecidos para el cumplimiento de dichas funciones y orientación acerca de como realizar gestiones ante el mismo, el Comité toma nota de que el MJP cuenta con una página Web en donde se ofrece información sobre sus funciones, objetivos y estructura, así como información concerniente a los departamentos y unidades que dependen del Ministerio, con la excepción de la Alta Corte de Justicia y la Procuraduría Pública. Sin embargo, el Comité observa que la normativa que rige el MJP no aparece en su página Web, como tampoco formularios para realizar gestiones ante el mismo ni información sobre cómo llevarlas a cabo. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.17. del Capítulo II de este informe).

[183] En décimo cuarto lugar, en relación con los mecanismos de rendición de cuentas al Estado y la ciudadanía sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera en que se recopila y procesa la información necesaria para ello, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del MJP manifestaron que el artículo 123 constitucional, en su párrafo 2, establece que los Ministros son responsables ante el Presidente de la República, y agregaron que aunque no tienen obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía, publican voluntariamente sus informes financieros y de gestión en su página Web. Sin embargo, el Comité advierte que estos informes no se encuentran colocados en la página Web del MJP, y considera que el Estado analizado podría compartirlos tanto en dicha página de Internet como por otros medios de comunicación para que la ciudadanía esté al tanto de la gestión del MJP, incluido lo que se refiere a sus funciones de organización judicial y de apoyo al Poder Judicial y a sus actividades anticorrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.18. del Capítulo II de este informe).

[184] Finalmente, en lo que se refiere a dificultades y necesidades de cooperación técnica, durante la visita *in situ*, los representantes del MJP pusieron de presente que les hace falta recursos presupuestarios y humanos, así como la creación de una unidad especializada para poder desarrollar un programa anticorrupción sólido y eficiente. Al respecto, indicaron que para ello les haría falta el fortalecimiento de capacidades y de conocimientos, así como capacitación tanto en temas anticorrupción como en idiomas extranjeros. Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por el MJP, en cuanto a que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.19. del Capítulo II de este informe).

³⁷ http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_sur_proj.pdf

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[185] En primer lugar, en lo referente a funciones de prevención de las prácticas corruptas de prácticas corruptas en los últimos cinco años, el Estado analizado no presentó información en su respuesta al cuestionario. Igualmente, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del MJP manifestaron que no contaban con información estadística sobre resultados de las actividades de prevención que han venido realizando. Al respecto, el Comité estima que sería importante que el MJP considere llevar estadísticas detalladas y desagregadas por año sobre las actividades de prevención de la corrupción que lleva a cabo, de manera que esta información pueda ser utilizada para identificar retos y recomendar, si corresponde, medidas correctivas. En atención a ello, formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.20. del Capítulo II de este informe).

[186] Igualmente, y teniendo en consideración la función que tiene el MJP como órgano administrador de los asuntos relacionados con recursos humanos tanto propios como de los órganos del Poder Judicial, el Comité toma nota de que en lo referente a la información estadística sobre funciones de sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, el Estado analizado tampoco presentó ninguna información. Al respecto, el Comité resalta la importancia de que el Estado analizado considere llevar estadísticas respecto de los procesos disciplinarios relacionados con prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, desagregada por año, a los fines de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.21. del Capítulo II de este informe).

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[187] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Ministerio de Justicia y Policía (MJP) en los acápite anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[188] El Estado analizado ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Procuraduría Pública como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[189] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 3.4.1. Nombrar los reemplazos para los miembros del Consejo de Selección y Formación del Personal del Poder Judicial cuyos mandatos han expirado de manera que pueda funcionar nuevamente y cumplir sus funciones (ver secciones 1.2., 2.2. y 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.2. Dar curso a la brevedad a los nombramientos pendientes de jueces a los fines de asegurar que la Alta Corte de Justicia cuente con el personal suficiente para cumplir cabalmente con sus funciones de administración de justicia (ver secciones 1.2., 2.2. y 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.3. Eliminar el requisito de autorización previa por parte del MJP para que los órganos del Poder Judicial pueda disponer de su propio presupuesto, estableciendo la obligación de que los mismos rindan informes financieros sobre la utilización de estos recursos (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.4. Considerar tomar las medidas normativas que sean necesarias a los fines de encomendar oficialmente la función de la prevención de la corrupción ya sea al MJP

o al órgano que considere pertinente, de manera que el Estado analizado pueda contar con un órgano con un mandato específico para este propósito (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).

- 3.4.5. Dotar al MJP o al órgano que designe oficialmente para realizar las tareas de la prevención de la corrupción con los recursos humanos y financieros suficientes, dentro de los recursos disponibles, a los fines de que pueda cumplir cabalmente con esta función (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.6. Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional, cuando sea aplicable, entre el MJP y otros órganos de control con funciones de prevención, detección, investigación o sanción de actos de corrupción para facilitar el cumplimiento de los propósitos de la Convención, cuando sea pertinente (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.7. Implementar un mecanismo formal de coordinación entre el MJP, el Ministerio de Finanzas, la CLAD y la Procuraduría, eliminando los filtros de comunicaciones, a los fines de que la CLAD pueda dar curso directamente a la Procuraduría Pública de aquéllos casos que muestren indicios de hechos de corrupción, para su investigación y procesamiento (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.8. Establecer mecanismos formales de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de temas relacionados con corrupción, a los fines de obtener su apoyo en la implementación de los propósitos de la Convención (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.9. Desarrollar procedimientos reglamentados para la toma de decisiones en el MJP, asegurando que contemplen procedimientos de revisión o reconsideración (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.10. Asegurar que los órganos del Poder Judicial cuenten con el suficiente personal de apoyo calificado para que puedan cumplir a cabalidad sus funciones constitucionales de administración de justicia, así como las de detección, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción (ver secciones 1.2, 2.2 y 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.11. Tomar las medidas necesarias para asegurar que se dé cumplimiento a la exigencia con reunir los requisitos para acceder a los cargos en el MJP, especialmente en lo que tiene que ver con los cargos directivos (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.12. Establecer un manual de clasificación y descripción de funciones, con su correspondiente escala salarial, para los funcionarios del MJP que no se encuentran incluidos en el actual sistema FISO (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.13. Elaborar procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas en todas las áreas del MJP, incluyendo manuales o guías relativas a las mismas; así como un sistema integrado de gestión de calidad (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).

- 3.4.14. Considerar tomar las medidas normativas del caso a los efectos de desarrollar un procedimiento disciplinario que defina con claridad en qué consiste la negligencia de funciones, que contemple sanciones administrativas por actos de corrupción, y que regule en detalle cómo se llevarán a cabo los sumarios administrativos, quién será la autoridad para llevarlos a cabo, y que establezca la obligación y el mecanismo para dar curso a la autoridad competente cuando se encuentren indicios de hechos que generen responsabilidad civil o penal, además de la administrativa (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.15. Desarrollar un mecanismo de atención a los reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del MJP y con el desempeño de sus funcionarios, que establezca claramente cuál es el curso que se va a dar a estos reclamos, quejas o denuncias; cuáles serán las medidas y criterios que se tomarán para atenderlas; y cuáles serán las consecuencias, especialmente en los casos relacionados con actos de corrupción (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.16. Colocar un buzón electrónico en la página Web del MJP que permita a la ciudadanía presentar sugerencias, reclamos, quejas y denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del MJP y con el desempeño de sus funcionarios, contemplando protección de la identidad (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.17. Colocar en la página Web del MJP la normativa que lo rige, así como formularios e instrucciones para realizar gestiones ante el mismo (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.18. Publicar los informes anuales financieros y de gestión del MJP en su página Web y en otros medios de comunicación, de manera que la ciudadanía esté al tanto de la gestión de este órgano de control, incluido lo referente a sus funciones de organización judicial y de apoyo al Poder Judicial y a sus actividades anticorrupción (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.19. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer al MJP con la cooperación técnica necesaria para la creación de una unidad especializada para desarrollar un programa anticorrupción sólido y eficiente, así como para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos en la materia (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.20. Llevar estadísticas detalladas y desagregadas por año sobre las actividades de prevención de la corrupción que el MJP lleva a cabo, de manera que esta información pueda ser utilizada para identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.21. Llevar estadísticas detalladas y desagregadas por año respecto de los procesos disciplinarios del MJP, incluidos los de los órganos del Poder Judicial, relacionados con prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, de manera que pueda conocerse el número total de casos investigados en los últimos cinco años, el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas

decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).

4. AGENCIA CENTRAL DE AUDITORÍA (CLAD)

4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[190] La Agencia Central de Auditoría (CLAD) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[191] La CLAD es una institución de naturaleza paraestatal bajo el Ministerio de Finanzas, cuyo objetivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 1º, del Decreto de Estado de 1972³⁸, es llevar a cabo el control de la administración de los servicios generales; de las instituciones del Gobierno, así como de los servicios públicos y empresas paraestatales específicamente designadas; y establece que las auditorías consistirán el examen de la validez de los informes financieros y de la efectividad de la eficacia de la estrategia de gestión³⁹.

[192] Asimismo, el párrafo 4 del mismo artículo 2 establece que el Ministro de Finanzas podrá delegar a la CLAD otras funciones de supervisión y de asesoría que considere pertinentes; disponiendo además que la CLAD podrá también emitir recomendaciones de ante el Ministro de Finanzas a iniciativa propia.

[193] El Decreto de Estado de 1972, en su artículo 2, párrafo 3, otorga a la CLAD la autoridad de solicitar de los funcionarios y comités acceso a la información necesaria para la inspección de todos los libros y récords, incluyendo minutas y correspondencia, así como información relacionada con la administración y el manejo de fondos o bienes. Estos oficiales y comités tienen la obligación de suministrar información y cooperación.

[194] En lo que corresponde a la manera en que se adoptan sus decisiones, el Estado analizado en su respuesta indica que éstas son adoptadas por un equipo de gerencia⁴⁰.

[195] En relación con el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades, durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD pusieron de presente que existen tres instituciones principales que se ocupan de las auditorías de las entradas y gastos del Gobierno: el Instituto Supremo de Auditoría (*Rekenkamer*/ISA), que es el órgano constitucional del Estado; la CLAD; y las Unidades de Auditoría Interna dentro de los Ministerios⁴¹.

[196] En lo que tiene que ver con la provisión de los cargos de sus máximas autoridades, durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD informaron que “*La ley establece que el Director deberá ser nombrado, suspendido o despedido por el Presidente, tras la nominación del Ministro de Finanzas. Esta nominación requiere de la aprobación del Consejo de Ministros. El mismo procedimiento deberá ser utilizado para el nombramiento de la Junta Directiva. Otros oficiales son nombrados por el Director*”.⁴²

³⁸ Artículos 1 y 2 del Decreto de Estado de 1972.

³⁹ Ver presentación en Power Point http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_sur_clad.pdf

⁴⁰ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 6.

⁴¹ Ver presentación en Power Point http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_sur_clad.pdf

⁴² Ver presentación en Power Point http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_sur_clad.pdf

[197] De conformidad con el artículo 4 del Decreto de Estado de 1972, el Director de la CLAD deberá ser contador y miembro del Instituto Holandés de Contadores Acreditados.

[198] Por lo que corresponde a la manera en que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, el procedimiento de selección se lleva a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Personal.⁴³

[199] En cuanto a la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, la CLAD utiliza el sistema FISO de clasificación y escala de sueldos aplicable al personal del servicio público. Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD informaron que ofrecen capacitación continua a sus funcionarios en relación con sus funciones.

[200] En relación con procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas y de acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de la calidad, el Estado analizado en su respuesta informa que la CLAD se rige por las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Asimismo, han implementado un sistema de gestión de auditorías (*CCH TeamMate*) y un sistema de manejo de documentos (DECOS), además de manuales para cada uno de estos sistemas.

[201] En lo que se refiere al régimen de responsabilidad del personal de la CLAD resultante de sus actuaciones, durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD informaron que, como parte del Ministerio de Finanzas, les es aplicable el régimen disciplinario de la Ley de Personal.

[202] Por cuanto a la manera en que se garantizan sus recursos presupuestarios, el Estado analizado en su respuesta indica que su presupuesto es aprobado y determinado por el Ministro de Finanzas⁴⁴.

[203] En relación con la manera en que suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones y da a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones, la CLAD cuenta con una página Web en donde se proporciona esta información, y que cuenta además con un buzón para preguntas y sugerencias.⁴⁵

[204] Por lo que respecta a obligación de rendir de cuentas, el artículo 2, párrafo 2, del Decreto de Estado de 1972 establece la obligación de la CLAD de presentar un informe anual ante el Ministro de Finanzas.

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[205] La Agencia Central de Auditoría (CLAD) cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[206] En primer lugar, en lo que respecta a la naturaleza de sus funciones, el Comité toma nota de que la CLAD es el órgano paraestatal encargado de efectuar el control interno de las finanzas de las instituciones del Estado, los servicios públicos y las empresas paraestatales. De conformidad con el

⁴³ Ver presentación en Power Point http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_sur_clad.pdf

⁴⁴ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 10.

⁴⁵ Ver www.clad.gov.sr

Decreto de 1972 que lo regula, este órgano de control se encuentra bajo la estructura del Ministerio de Finanzas, que es ante quien tiene que rendir cuentas.

[207] Por otra parte, el Instituto Supremo de Auditoría (*Rekenkamer/ISA*), es el órgano constitucional autónomo encargado del control externo de las finanzas del Estado en el sentido más amplio, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución⁴⁶. El ISA debe presentar un informe de evaluación del manejo de los asuntos financieros del Estado ante la Asamblea Nacional cada mes de abril. Cabe señalar que si bien en esta ocasión no se está analizando el ISA, el Comité considera necesario referirse a este órgano debido a las funciones que comparte con la CLAD como se verá más adelante.

[208] Sobre el particular, durante la visita *in situ* los representantes de la CLAD manifestaron que si bien su función es la de llevar a cabo el control interno de las instituciones del Estado y las paraestatales, y que es función del ISA llevar el control externo, en la práctica esto no se está llevando a cabo. Esto se debe a que la ISA cuenta no cuenta con contadores certificados ni auditores que puedan efectuar y avalar auditorías.

[209] Al respecto, informaron que estaban trabajando en una propuesta a los efectos de que exista una línea clara entre las funciones en la práctica de la ISA y la CLAD, y que a la vez coloque a las Unidades de Auditoría Interna de las instituciones de Gobierno bajo la responsabilidad de la CLAD.

[210] El Comité, en vista de lo anterior, estima necesario para los propósitos de la Convención que el Estado analizado considere establecer en la práctica una línea clara de las responsabilidades entre el ISA, la CLAD y las Unidades de Auditoría Interna dentro de los órganos de Gobierno y empresas paraestatales, y poder así asegurar la efectividad de sus controles internos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.1. del Capítulo II de este informe).

[211] Al respecto, cabe señalar que durante la visita *in situ*, la Asociación Surinamesa de Contadores (SUVA), puso de presente que el ISA no cuenta con contadores certificados que puedan hacer las auditorías a los efectos de cumplir a cabalidad su función de órgano de control externo, y que por lo tanto está delegando esta función a la CLAD. Asimismo, informaron que la SUVA ha preparado proyectos de ley para la reforma de la CLAD y el ISA, y que estos proyectos de ley han sido presentados ante el Ministerio de Finanzas⁴⁷.

[212] En segundo lugar, el Comité observa que el Estado analizado en su respuesta pone de presente entre sus dificultades para el cabal cumplimiento de sus funciones la falta de sistemas adecuados de control interno en los Ministerios.⁴⁸ Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD explicaron que la falta de procedimientos uniformes en los órganos gubernamentales dificultan la obtención de información confiable y oportuna, y dificulta la detección de actos de corrupción por parte de la CLAD. Teniendo en consideración la importancia que tiene la función de detección de actos de corrupción por parte del órgano de control interno del Estado, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.2. del Capítulo II de este informe).

⁴⁶ El artículo 149 de la Constitución de Suriname establece que: “1. *Será establecida una institución por ley que tendrá la función de supervisar el gasto de las finanzas del Estado, así como el control del manejo de los fondos del Gobierno en el sentido más amplio. 2. La justificación así como la efectividad del gasto y manejo de los fondos del Estado será supervisado y controlado.*”

⁴⁷ En su documento de comentarios al proyecto de informe preliminar, el país analizado planteó lo siguiente: “*El ISA [Rekenkamer] de Suriname no ha delegado formalmente la función externa a la CLAD, pero en la práctica podemos decir que ese es el caso.*”

⁴⁸ Respuesta de Suriname al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 14.

[213] En el mismo sentido, en esa ocasión, la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*” puso de presente que existe una falta de uniformidad en los procedimientos entre los Ministerios.

[214] En tercer lugar, en relación con la provisión de los cargos de sus máximas autoridades, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD informaron que si bien el Decreto de Estado de 1972 establece que deberá haber un Director nombrado por el Presidente de la República con la recomendación del Ministro de Finanzas, no ha habido un Director desde hace 22 años. Adicionalmente, la Junta Directiva presidida por el Director, que estaría a cargo de la toma de decisiones, tampoco ha sido nombrada debido a la mencionada falta de Director.

[215] En esa oportunidad, los representantes de la CLAD explicaron que la falta de Director se debe a los requisitos que la ley establece que éste debe reunir, puesto que debe ser un contador público acreditado con el Real Instituto Holandés de Contadores Registrados (NIVRA) y además deberá ser ciudadano de Suriname, y que en Suriname existe escasez de auditores certificados.

[216] Las razones para ello es porque los contadores públicos acreditados que hay en Suriname, a pesar de haber nacido en el país, no tienen la ciudadanía surinamesa y por tanto no pueden ser funcionarios públicos y mucho menos ocupar el puesto de Director de la CLAD. Cabe mencionar que debido a esta situación, los contadores públicos acreditados con el Instituto Holandés de Contadores Registrados, que en estas condiciones son los únicos que pueden avalar los informes de auditoría, tienen que ser contratados como consultores porque, como se indicó anteriormente, no son ciudadanos surinameses y de no ser por estos consultores, la CLAD no podría cumplir con sus funciones de control interno de los órganos del Estado y paraestatales. Mientras tanto, la CLAD se maneja con un Gerente y un equipo de gerencia que son quienes están a la cabeza del órgano y aseguran su funcionamiento.

[217] En ese sentido, los representantes de la CLAD pusieron de presente que mientras la legislación holandesa había cambiado y se había actualizado, esto no había sucedido con la legislación surinamesa. En efecto, el Decreto de 1972 que regula la CLAD fue emitido por la Reina de Holanda, antes de que la República de Suriname obtuviera su independencia y adoptara su actual Constitución y la única revisión que tuvo fue en 2011, cuando el Gobierno actualizó los montos en los artículos correspondientes de manera de utilizar el dólar surinamés en lugar del guildar, moneda que fue reemplazada en 2004. En ese sentido, señalaron también que la profesión de contador no está regulada en Suriname, y que no existe un órgano de registro o de acreditación nacional que pudiera ofrecer una alternativa al requisito de acreditación con el Instituto Holandés de Contadores Registrados (NIVRA).

[218] Al respecto, el Comité desea recordar que el tema de la regulación de la profesión de contador, la creación de un órgano de control de estos profesionales, y la colegiación obligatoria fueron temas de la tercera ronda y que en esa ocasión se le formularon al Estado recomendaciones al Estado analizado en ese sentido y por lo tanto no se referirá a ello en esta ocasión.

[219] Sin perjuicio de ello, el Comité considera que el Estado analizado podría actualizar la legislación que regula la CLAD, estableciendo entre otras cosas las condiciones para que este órgano de control pueda contar el Director y Junta Directiva correspondientes, de manera que este órgano de control pueda funcionar a cabalidad. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.3. del Capítulo II de este informe).

[220] Asimismo, el Comité observa que si bien el Decreto de 1972 establece que el nombramiento del Director de la CLAD será hecho por el Presidente de la República con la recomendación del Ministro de Finanzas, no establece un procedimiento de selección para ello. Sobre el particular, y sin perjuicio de las recomendaciones que se le formularon en la segunda ronda cuando se analizó el tema

de la selección de los funcionarios públicos en general, el Comité considera pertinente que el Estado analizado considere regular el procedimiento de selección del Director y la Junta Directiva de la CLAD, asegurando que dicho procedimiento esté basado en los principios de mérito, publicidad, equidad y eficiencia (ver recomendación 4.4.4. del Capítulo II de este informe).

[221] En cuarto lugar, por lo que se refiere a la manera en que se contratan los recursos humanos administrativos y de apoyo de la CLAD, estos funcionarios son contratados por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Personal. Al respecto, durante la segunda ronda el Comité analizó los procedimientos de contratación de los servidores públicos y formuló recomendaciones puntuales al Estado analizado sobre la Ley de Personal y por lo tanto no se referirá a este procedimiento.

[222] Sin perjuicio de ello, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone de presente entre sus dificultades la falta de suficientes auditores calificados en la CLAD⁴⁹. Al respecto, el Comité considera pertinente que el Estado analizado considere fortalecer a la CLAD, asegurándose de que cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.5. del Capítulo II de este informe).

[223] Asimismo, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone asimismo de presente entre sus dificultades la falta de un código de conducta aplicable a la generalidad de los servidores públicos⁵⁰. Al respecto, teniendo en consideración que este fue un tema de la primera ronda y que en esa ocasión se formularon recomendaciones al Estado analizado en ese sentido, el Comité se referirá al tema en la sección de seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas durante la primera ronda de este informe.

[224] En quinto lugar, en relación con la sujeción del personal a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD informaron que su régimen disciplinario está contemplado en la Ley de Personal, que es aplicable a todos los servidores del Ministerio de Finanzas del cual la CLAD forma parte. Al respecto, y teniendo en consideración que este procedimiento es el mismo para todos los servidores de la administración pública, el Comité ha formulado una recomendación en la sección correspondiente al Ministerio de Justicia y Policía, que es pertinente asimismo para la CLAD por tratarse de un tema de naturaleza transversal (ver recomendación 3.4.14. del Capítulo II de este informe).

[225] No obstante lo anterior, tal y como se pusiera de presente en los párrafos anteriores, durante la visita *in situ* el Comité pudo comprobar que debido a las condiciones necesarias para poder certificar auditorías, al momento los únicos contadores públicos certificados con el Instituto Holandés de Auditorías y que por ende pueden avalar los informes de auditoría de la CLAD, no son ciudadanos de Suriname y consecuentemente han tenido que ser contratados mediante contratos de consultoría. Al respecto, por ser consultores y no funcionarios públicos, estos contadores certificados no están sujetos al régimen de incompatibilidades, inhabilidades ni de responsabilidad de sus actuaciones a los que están sujetos los funcionarios públicos sino que están sujetos a los términos establecidos en sus respectivos contratos⁵¹.

⁴⁹ Respuesta de Suriname al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 14.

⁵⁰ *Ídem*.

⁵¹ En su documento de comentarios al proyecto de informe preliminar, el país analizado planteó lo siguiente: “*Los contadores públicos certificados de la CLAD también deben cumplir con el código de conducta del órgano profesional de contadores públicos certificados holandeses*”.

[226] Al respecto, el Comité considera que a pesar de que estos consultores no son funcionarios públicos, sí están ejerciendo funciones públicas con responsabilidad sobre el manejo de los recursos públicos y son vitales para el funcionamiento de la CLAD. Por esa razón, el Comité considera que el Estado analizado debería considerar tomar las medidas necesarias de manera que estos consultores estén sujetos al mismo régimen de incompatibilidades, inhabilidades y de responsabilidad por sus actuaciones que los funcionarios públicos de la CLAD y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.6. del Capítulo II de este informe).

[227] En sexto lugar, durante la visita *in situ* la CLAD informó que cuando se encuentran indicios de hechos delictivos en los informes de auditoría, incluidos casos de corrupción, la información no es remitida de oficio a la Procuraduría Pública sino al Ministro de Finanzas, quien tomará la decisión de notificar o no al Ministro de Justicia y Policía, quien a su vez tomará la decisión de notificar o no a la Procuraduría Pública. Cabe señalar que en esa ocasión informaron que también comparten los resultados de las auditorías con el Instituto Supremo de Auditoría (ISA). Sin embargo, aclararon que no existe una obligación para la CLAD ni para el ISA de dar curso a estos casos a la Procuraduría Pública.

[228] Sobre el particular, el Comité considera de gran importancia para los propósitos de la Convención, que el Estado analizado considere remover los filtros de comunicación entre la CLAD y la Procuraduría Pública, y que considere establecer la obligación de que los órganos de control tanto interno como externo remitan de oficio a la Procuraduría Pública de Finanzas los resultados de aquellas auditorías en las que se han encontrado indicios de hechos punibles, especialmente casos de corrupción, para su investigación y procesamiento. Para ello, el Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 3.4.7. y 4.4.7. del capítulo II de este informe).

[229] En séptimo lugar, en lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD pusieron de presente que no existe ningún mecanismo formal entre las tres instituciones principales a cargo de las auditorías del Gobierno: la CLAD, el ISA y las Unidades de Auditoría Interna de los Ministerios⁵². Teniendo en consideración la importancia de fortalecer la comunicación y coordinación entre estas instituciones para facilitar la detección de actos de corrupción, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.8. del Capítulo II de este informe).

[230] En octavo lugar, en lo que tiene que ver con mecanismos de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que “*La CLAD no ha establecido procedimientos internos para la atención de quejas*”⁵³. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado establezca procedimientos internos documentados para la atención de reclamos, quejas o denuncias de esta naturaleza en la CLAD y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.9. del Capítulo II de este informe).

[231] En ese orden de ideas, el Comité advierte que la página Web de la CLAD incluye un buzón para preguntas y sugerencias⁵⁴. Al respecto, el Comité considera que sería beneficioso el ampliar el alcance de este buzón a los efectos de que pudiera ser utilizado por la ciudadanía para presentar reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la CLAD; el desempeño del personal a su servicio; así como para presentar denuncias con protección de la identidad sobre presuntos actos de corrupción en los órganos del Estado y organismos paraestatales

⁵² Ver presentación en Power Point: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_sur_clad.pdf

⁵³ Respuesta de Suriname al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 10.

⁵⁴ Ver <http://www.clad.gov.sr/smartcms/form.asp?i=1>

que se encuentran bajo la competencia de la CLAD, e instrucciones sobre cómo hacerlo. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.10. del Capítulo II de este informe).

[232] Finalmente, en lo relativo a la los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera en que esta información se hace pública para que los ciudadanos puedan tener acceso a la misma, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que la CLAD es responsable ante el Ministro de Finanzas y que anualmente presenta sus estados financieros e informa sobre su gestión de auditoría y otras actividades. Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la CLAD informaron que esta información no se hacía pública. Sobre el particular, el Comité estima que el Estado analizado podría colocar los informes de gestión y las memorias anuales de la CLAD en su página Web y de otros medios que estime conveniente, de manera que la ciudadanía pueda conocer esta información. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.11. del Capítulo II de este informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[233] A través de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de la gestión de la Agencia Central de Auditoría (CLAD), de la cual se destaca la siguiente:

Número de auditorías e investigaciones conducidas en los últimos 5 años

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES					
Año	Informes de auditoría	Cartas de gerencia	Memorandos	Otros (asesoría, apoyo)	Total
2009	42	15	-	4	61
2010	29	47	3	4	83
2011	28	24	-	0	52
2012	44	56	71	1	172
2013	42	17	86	4	149
EMPRESAS PARAESTATALES					
Año	Informes de auditoría	Cartas de gerencia	Memorandos	Otros (asesoría, apoyo)	Total

2009	34	3	-	8	45
2010	47	1	3	8	59
2011	37	-	8	5	50
2012	82	-	1	14	97
2013	59	0	1	3	63

Fuente: Información en formato Excel proporcionado por la CLAD⁵⁵

[234] De la información anterior puede apreciarse que la CLAD ha estado elaborando informes de auditoría, prestando asesoría y formulando recomendaciones. Sin embargo, no es posible determinar si estas auditorías fueron de naturaleza interna o externa; en cuántas se encontraron indicios de hechos punibles, particularmente relacionados con actos de corrupción; cuántas fueron reportadas a la autoridad responsable de dar seguimiento; cuáles fueron los resultados efectivos de las recomendaciones emitidas por la CLAD; cuáles fueron los montos resultantes de responsabilidades administrativas, civiles o por indicios de responsabilidad penal y cuál fue el monto recuperado a favor del Estado resultante de estas responsabilidades, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario. Por lo tanto, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.12. del Capítulo II de este informe).

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[235] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Agencia Central de Auditoría (CLAD) en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[236] **El Estado analizado ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la CLAD como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[237] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Establecer una línea clara en la práctica entre las funciones del Instituto Superior de Auditoría (ISA/*Rekenkamer*) y las de la Agencia Central de Auditoría (CLAD), colocando a las Unidades de Auditoría Interna bajo la responsabilidad de la CLAD, de manera que se asegure la eficacia de sus respectivas áreas de control (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Fortalecer los sistemas de control interno de los órganos gubernamentales y paraestatales mediante la implementación de procedimientos consistentes de aplicación uniforme en dichos órganos, que aseguren asimismo el suministro de información confiable y oportuna a

⁵⁵ Ver Informe Excel http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_sur_number.pdf

los órganos de control interno y externo del Estado (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).

- 4.4.3. Considerar la actualización de la normativa que regula la CLAD, estableciendo entre otras cosas las condiciones para que este órgano de control pueda contar con un Director y Junta Directiva (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.4. Considerar regular el procedimiento de selección del Director y Junta Directiva de la CLAD, asegurando que dicho procedimiento esté basado en los principios de mérito, publicidad, equidad y eficiencia (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.5. Fortalecer a la CLAD, dotándola de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.6. Tomar las medidas que sean necesarias a los efectos de que los consultores de la CLAD que se encuentran ejerciendo funciones públicas, especialmente las que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos, estén sujetos al mismo régimen de incompatibilidades, inhabilidades y de responsabilidad por sus actuaciones que los funcionarios públicos (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.7. Establecer la obligación de los órganos de control interno y externo de las finanzas del Estado de dar curso a la Procuraduría Pública de los resultados de aquéllas auditorías en las que se han encontrado indicios de hechos punibles, especialmente los relacionados con corrupción (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.8. Desarrollar mecanismos formales y ágiles de coordinación entre las instituciones principales de control de los órganos de gobierno y paraestatales, la CLAD y el ISA, así como las Unidades de Auditoría Interna de los Ministerios, cuando sea aplicable, a los fines de optimizar el flujo de información y facilitar la detección de actos de corrupción (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.9. Desarrollar un mecanismo de atención a los reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la CLAD y con el desempeño de sus funcionarios, que establezca claramente cuál es el curso que se va a dar a estos reclamos, quejas o denuncias; cuáles serán las medidas y criterios que se tomarán para atenderlas; y cuáles serán las consecuencias, especialmente en los casos relacionados con actos de corrupción (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.10. Ampliar el alcance del buzón de preguntas y sugerencias que actualmente aparece en la página Web de la CLAD, a los efectos de que pueda ser utilizado por la ciudadanía para presentar reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la CLAD; el desempeño del personal a su servicio; así como para presentar denuncias con protección de la identidad sobre presuntos actos de corrupción en los órganos del Estado y organismos paraestatales que se encuentran bajo la competencia de la CLAD, e incluir instrucciones de cómo hacerlo (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.11. Hacer públicos los informes de gestión y memorias anuales de la CLAD, colocándolos en la página Web de este organismo y de otros medios que estime conveniente, de manera que la ciudadanía pueda conocer esta información (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).

- 4.4.12. Completar la información estadística relativa a la detección de actos de corrupción; de manera que pueda conocerse si las auditorías realizadas fueron de naturaleza interna o externa; en cuántas se encontraron indicios de hechos punibles, particularmente relacionados con actos de corrupción; cuántas fueron reportadas a la autoridad responsable de dar seguimiento; cuáles fueron los resultados efectivos de las recomendaciones emitidas por la CLAD; cuáles fueron los montos resultantes de responsabilidades administrativas, civiles o por indicios de responsabilidad penal y cuál fue el monto recuperado a favor del Estado resultante de estas responsabilidades, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.3. del Capítulo II de este informe).

III. BUENAS PRÁCTICAS

[238] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología* para el análisis de la implementación de la disposición de la Convención seleccionada en la Cuarta Ronda y en la *Estructura* para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario en la sección correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”, las cuales ha deseado compartir con los demás Estados Parte del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

[239] **En relación con el Ministerio de Justicia y Policía (MJP):**

[240] - Programas de sensibilización sobre prevención de la corrupción dirigidos a los a los medios de comunicación, quienes tienen la tarea de informar a la ciudadanía.

[241] - Capacitaciones dirigidas a altas autoridades y otros servidores públicos en temas de prevención a los fines de que puedan distinguir qué es y qué no es corrupción⁵⁶.

IV- SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS EN LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS⁵⁷

[242] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por la República de Suriname en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en el Informe de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas⁵⁸, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado VI de la *Metodología* adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[243] El Comité también tomará nota en esta sección del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

⁵⁶ Para mayor información ver:

<http://www.gov.sr/sr/ministerie-van-biza/actueel/archief/2011/anti-corruptie.aspx>

<http://www.dna.sr/nieuws/anti-corruptie-compilatie-gepresenteerd/>

http://undpsuriname.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:international-anti-corruption-day&catid=1:news&Itemid=12

⁵⁷ El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el anexo de este informe.

⁵⁸ Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/sur.htm>

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación 1.1.

Considerar la posibilidad de fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, al igual que asegurar que las leyes sobre esta materia se apliquen plenamente a todos los funcionarios públicos para hacer posible la eficaz observancia práctica del sistema de ética pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Asegurar que los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, incluidos los que ocupan cargos políticos, están sujetos a disposiciones sobre conflictos de intereses.

[244] El Estado analizado en su respuesta indica que hasta el momento, no hay nuevos desarrollos fuera de lo que se ha informado en las rondas anteriores.⁵⁹

[245] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*” puso de presente que el concepto de conflicto de interés es el menos conocido por los funcionarios públicos, que si bien están familiarizados con el clientelismo y el nepotismo, no lo consideran conflicto de interés.

[246] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la implementación de la anterior medida.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Implementar disposiciones sobre conflictos de intereses que especifiquen las inhabilidades e incompatibilidades aplicables, antes, durante y, por un periodo razonable, después de ejercer funciones públicas.

[247] El Estado analizado en su respuesta indica que hasta el momento, no hay nuevos desarrollos fuera de lo que se ha informado en las rondas anteriores.⁶⁰

[248] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la implementación de la anterior medida.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

⁵⁹ Respuesta de Suriname al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 17.

⁶⁰ Respuesta de Suriname al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 18.

Fortalecer, complementar y actualizar las normas que rigen la conducta de la generalidad de los servidores públicos, incluyendo aquellas disposiciones orientadas a prevenir conflictos de intereses, sin perjuicio de los regímenes dirigidos a sectores particulares que por su especificidad puedan requerir un tratamiento especializado.

[249] El Estado analizado en su respuesta presentó la siguiente información: “A iniciativa del Ministerio de Justicia y Policía, los oficiales y miembros del Parlamento fueron capacitados en varios temas relacionados con corrupción, no solamente con respecto a su propio comportamiento, sino también encaminado a reconocerlo cuando hay intentos por parte de terceros.”

[250] Al respecto, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la Agencia Central de Auditoría (CLAD), pusieron de presente entre sus dificultades la falta de un código de ética aplicable a la totalidad de los servidores públicos. Asimismo, en esa misma ocasión los representantes de la Asamblea Nacional manifestaron que existía la necesidad de implementar un código de ética y que habría que preparar un proyecto.

[251] Por otra parte, los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*” también pusieron de presente que hacía falta de un código de ética aplicable a la totalidad de los servidores públicos. Al respecto, señalaron que habían presentado un proyecto de Código de Ética ante el Ministerio del Interior, pero que hasta la fecha no había prosperado.

[252] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la implementación de la anterior medida.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Crear o fortalecer los mecanismos que garanticen que no se produzcan nombramientos contrarios al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes dentro de la función pública.

[253] El Estado analizado en su respuesta presentó la siguiente información:

[254] “*Tal y como fue mencionado en las rondas anteriores, los miembros del Gobierno, de la Judicatura, oficiales públicos y miembros del Parlamento, al aceptar el oficio hacen un juramento mediante el cual prometen que no cometerán omisiones o que no tomarán acciones incompatibles con sus funciones*”⁶¹

[255] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la implementación de la anterior medida, toda vez que esta medida se refiere a los nombramientos de los servidores públicos.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Crear e implementar mecanismos que permitan determinar, en casos concretos, si quien desempeña funciones públicas se encuentra en una situación de conflicto de intereses y que permita adoptar medidas necesarias a fin de proteger el interés público, tales como la desvinculación del ejercicio de sus funciones, su separación del conocimiento oficial del asunto,

⁶¹ Respuesta de Suriname al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 20.

renuncia a los intereses particulares en conflicto o la invalidez de las decisiones proferidas por quien se encuentre en tal situación.

[256] El Estado analizado en su respuesta presentó la siguiente información:

[257] *“En el caso de un presunto conflicto de interés, la persona involucrada es retirada como una medida preventiva para proteger el interés público”.*⁶²

[258] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la implementación de la anterior medida, toda vez que esta información había sido tomada en cuenta en el análisis de la primera ronda, y que la medida se refiere a la inexistencia de mecanismos para determinar, en casos concretos, si una persona que desempeña funciones públicas está en situación de conflicto de intereses y, al mismo tiempo, adoptar las medidas oportunas necesarias para proteger los intereses del Estado⁶³.

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su competencia o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente en ejercicio de sus funciones, en este último caso durante un período razonable.

[259] El Estado analizado en su respuesta pone de presente que a la fecha no hay nueva información⁶⁴.

[260] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la implementación de la anterior medida.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación 1.2.

Considerar la posibilidad de fortalecer y actualizar los sistemas de control y uso de los recursos dentro de la gestión pública, desarrollando normas susceptibles de aplicación coercitiva a todas las autoridades y funcionarios públicos que establezcan la obligación de preservar y usar adecuadamente los recursos que se les asignen en el desempeño de sus funciones.

[261] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de la misma, la siguiente:

[262] *“Introducción de un formulario detallado de misión. Al regresar al país el representante de Suriname deberá completar un cuestionario extenso (más de cincuenta preguntas). Anterior a la misión, se firma un formulario de compromiso”.*

⁶² *Ídem*, pág. 21.

⁶³ Informe sobre la implementación en Suriname de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 6.

⁶⁴ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 22.

[263] *“Introducción de un sistema dentro de los diferentes departamentos gubernamentales, mediante la cual el uso indebido de teléfono por oficiales (p. ej. para asuntos personales) deberá ser evitado o eliminado y los costos telefónicos deberían disminuir. Cada Departamento/Ministerio tiene acceso a un cierto número de líneas telefónicas y teléfonos, mediante los cuales se pueden hacer llamadas”*.⁶⁵

[264] Por otra parte, durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil “Stiching Projecta” pusieron de presente que la falta de procedimientos uniformes para el manejo de los recursos resultaba frecuentemente en problemas tales como sobrepagos en las contrataciones públicas y pérdidas de los recursos del Estado.

[265] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la anterior medida y de la necesidad de que de atención adicional a la misma, toda vez que el origen de esta recomendación se basó en la *“inexistencia de una disposición que expresamente imponga el deber de los funcionarios públicos de conservar y usar debidamente los recursos que se les confían”*.⁶⁶

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación 1.3.

Considerar adoptar mecanismos que exijan específicamente a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Teniendo presente la iniciativa legislativa existente, establecer medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

[266] En su respuesta, el Estado analizado indica que no hay ninguna información nueva, pero que se han llevado a cabo cursos de sensibilización para funcionarios públicos a iniciativa del Ministerio de Justicia y Policía.⁶⁷

[267] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la anterior medida.

⁶⁵ En sus comentarios al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado planteó lo siguiente: *“De conformidad con los Artículos 36 y siguientes de la Ley de Personal, un funcionario público está obligado a cumplir sus funciones relacionadas con su trabajo y las órdenes en relación con su trabajo de la mejor manera posible, y además cumplirlas de manera puntual y fiel y comportarse siempre como debe hacerlo un servidor bueno y fiel del país. También se requiere que se comporte de acuerdo con los reglamentos del departamento en el que esté empleado.”*

⁶⁶ Informe sobre la implementación en Suriname de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 8.

⁶⁷ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 24.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Adoptar e implementar medidas de protección para los funcionarios públicos que denuncien, de buena fe, actos de corrupción, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las amenazas o represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación.

[268] En su respuesta, el Estado analizado pone de presente que no hay información nueva respecto de este tema⁶⁸, pero que el artículo 206(a) del Código de Procedimientos Penales permite que un juez pueda escuchar a un testigo amenazado y que en este caso su identidad quedaría protegida.

[269] Por otra parte, durante la visita *in situ*, los representantes de la Asamblea Nacional pusieron de presente que les hace falta una ley de protección de denunciantes de actos de corrupción y que estarían dispuestos a tomar en cuenta la Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos, en la redacción de un eventual proyecto de ley.

[270] Cabe señalar que en esa ocasión los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*” pusieron de presente que en la práctica no existe un mecanismo independiente para presentar quejas y denuncias que garantice protección de la identidad al denunciante.

[271] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la anterior medida.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 2.1.

Considerar la posibilidad de establecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad, cuando corresponda, a través de las normas que sean pertinentes.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Implementar una normativa específica, considerando la iniciativa legal existente, que incluya plazos y circunstancias razonables para exigir la presentación periódica y actualizada de la declaración de los ingresos, activos y pasivos, por parte de las personas que desempeñen funciones públicas en los cargos que establezca la ley, que incluya, además, un régimen sancionatorio para quienes no cumplan con la obligación de presentar dichas declaraciones. Estos sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas constituyen un instrumento para evitar y detectar conflictos de intereses y actos o actividades ilícitas.

⁶⁸ *Ídem.*

[272] En su respuesta, el Estado analizado pone de presente que existe un Proyecto de Ley Anticorrupción que se prevé atendería el tema⁶⁹.

[273] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la Asamblea Nacional informaron que se ha instalado una comisión para estudiar el referido proyecto de ley anticorrupción a los efectos de verificar su alcance y estudiar si es que requiere revisiones, antes de traerlo a la consideración de la misma Asamblea, donde se espera que se apruebe pronto⁷⁰.

[274] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la anterior medida,⁷¹.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Una vez implementados, utilizar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos como un instrumento para prevenir y detectar conflictos de intereses y actividades o actos ilícitos.

[275] El Estado analizado no se refirió a la medida anotada de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que preste atención adicional a su implementación.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones de los ingresos, activos y pasivos, con sujeción al sistema jurídico vigente.

[276] El Estado analizado en su respuesta se refiere nuevamente al proyecto de Ley Anticorrupción pendiente de aprobación.⁷²

[277] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la anterior medida.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11, DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 3.1.

Considerar fortalecer y, en su caso, crear los órganos de control superior en las funciones que desarrollan sobre el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 4 y 11 del artículo III de la Convención, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones;

⁶⁹ *Ídem*, pág. 26.

⁷⁰ En su documento de comentarios al proyecto de informe preliminar, el país analizado planteó lo siguiente: “Suriname señala que tanto las recomendaciones de las rondas anteriores como los principios contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción han sido incluidos en la última versión del Proyecto de Ley Anticorrupción. Este proyecto está en este momento bajo consideración del órgano constitucional más alto de Suriname para su adopción por la Asamblea Nacional. Esto representa la última etapa en el proceso legislativo para la implementación de legislación en Suriname.”

⁷¹ Informe sobre la implementación en Suriname de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 8

⁷² Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 27.

y estableciendo mecanismos necesarios que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una periódica evaluación y seguimiento de las mismas.

[278] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de la misma, los siguientes:

[279] *“Fortalecimiento del Poder Judicial (jueces y procuradores) en 2011 con siete jueces y en 2013 con 8 procuradores”.*

[280] *“Construcción de dos edificios para el Poder Judicial; uno de los cuales estará en uso en un futuro próximo”.*

[281] *“Inicio en 2012 del proceso de implementación de un código de ética escrito y ejecutable para el Poder Judicial durante un taller de Gerencia para el Poder Judicial”.*

[282] *“Cursos regulares en temas tales como actualización legal”.*

[283] *“Fortalecimiento de la Institución Suprema de Auditoría [ISA/Rekenkamer] en abril de 2012, mediante el nombramiento de un Presidente y tres nuevos miembros. Este instituto había operado durante varios años sin un Presidente”.* El Estado analizado posteriormente agregó que ha entrado en vigor una nueva Ley sobre la Legitimidad y Posición Legal de la Institución Suprema de Auditoría de Suriname para el período comprendido entre el 1º de junio de 2008 y el 31 de marzo de 2011.

[284] Sin perjuicio de las recomendaciones específicas que se formularon en las secciones correspondientes a los órganos del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Policía y la CLAD del análisis del artículo Seleccionado para la Cuarta Ronda, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la anterior recomendación y de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, toda vez que si bien no se analizó la ISA, éste órgano de control fue objeto de discusión durante el análisis correspondiente a la CLAD, quedando de manifiesto que la ISA no está en este momento en condiciones de cumplir con su función constitucional de control externo del manejo de los recursos del Estado y que en la práctica sus funciones de auditoría actualmente están siendo cumplidas por la CLAD, lo cual ha quedado registrado en el Capítulo II de este informe.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)

4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación 4.2.1.

Establecer un sistema efectivo aplicable sobre el acceso a la información pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer normas escritas claras sobre el tipo de información que se puede suministrar en el marco del sistema.

[285] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información:

[286] *“La publicación de la página Web del Gobierno (www.gov.sr), con enlaces a todos los diferentes Departamentos (Ministerios). En la página Web, el público puede encontrar entre otra información, condiciones para obtener permisos, procedimientos y requisitos. En la mayoría de los Ministerios/Departamentos, es posible registrar una queja.*

[287] *“Todos los Ministerios tienen un programa informativo en la televisión, en la cual los desarrollos e información relacionados con este Departamento son discutidos.*

[288] *“Ejemplar semanal del ‘Periódico del Gobierno’ en el cual se publica información relativa a los departamentos. Por ejemplo, el Ministerio responsable de expedir dominios sobre propiedad – que incluye decisiones relacionadas con compras públicas – publica una lista con los nombres de las personas a quienes se les expidieron dominios de propiedad”.*

[289] Asimismo, el Estado analizado indica que en la página Web del Gabinete del Vicepresidente se están publicando las licitaciones públicas; que en junio de 2012 se publicaron las reglas para los trabajos públicos y las condiciones de ejecución; que la Oficina de Administración de Impuestos ha actualizado su página Web; y que la legislación sobre impuestos ha sido también publicada en Internet.

[290] Al respecto, cabe anotar que durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*” pusieron de presente que no hay acceso a la información pública para el público en general y que hace falta una ley de acceso a la información pública. En ese sentido, informaron que existe un proyecto de ley que se presentó al Ministerio del Interior, pero que no ha prosperado. Asimismo, agregaron que no hay iniciativa en el área de transparencia fiscal.

[291] El Comité toma nota de los pasos adelantados por el Estado analizado y de la necesidad de que preste atención a la implementación de la medida a) de la anterior recomendación, toda vez que su origen se remonta al análisis de la Primera Ronda, en donde el Comité observó una ausencia de disposiciones que regulen el acceso a la información pública y de disposiciones que obliguen al cumplimiento de ese derecho.⁷³

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer normas que reconozcan el derecho de todas las personas a solicitar información o a consultar u obtener copia de los documentos en poder o bajo control de las instituciones públicas, en relación con medidas oficiales, con excepción de los casos legalmente protegidos.

[292] El Estado analizado en su respuesta pone de presente que no existe información nueva sobre el tema.

[293] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención a la implementación de la medida b) de la anterior recomendación.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

⁷³ Informe sobre la implementación en Suriname de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 12.

Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y para el establecimiento de sanciones en los casos de incumplimiento de la obligación de suministrar información.

[294] El Estado analizado no se refirió a la medida c) anotada de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación.

Recomendación 4.2.2.

Establecer el requisito de que todas las entidades estatales, en la medida de lo posible, divulguen públicamente sus procedimientos, resultados y demás información relevante a través del uso de métodos de comunicaciones como publicaciones, centros de divulgación, medios masivos de comunicación y sitios en Internet.

[295] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, la siguiente:

[296] “...la publicación del sitio Web del Gobierno (www.gov.sr), con enlaces a todos los diferentes departamentos (Ministerios). En el sitio Web el público puede encontrar, entre otros, condiciones para permisos, procedimientos y requisitos, leyes. En la mayoría de los enlaces de los Ministerios/departamentos, es posible presentar quejas por tratamiento incorrecto.

[297] “Algunos de los Departamentos también publican licitaciones públicas.

[298] “Todos los Ministerios tienen un programa informativo de televisión, en el cual se discuten los desarrollos e informaciones relacionados con dicho departamento.

[299] “Le publicación semanal del ‘Periódico del Gobierno’ en el cual se publica información relacionada con los departamentos. Por ejemplo, el Ministerio responsable de expedir dominios sobre propiedad – que incluye decisiones relacionadas con compras públicas – publica una lista con los nombres de las personas a quienes se les expidieron dominios de propiedad”.

[300] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la anterior medida y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en consideración que la recomendación se refiere no únicamente a la publicación de información, pero al establecimiento del requisito de hacerlo.

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación 4.3.1.

Establecer mecanismos formales de consulta que permitan generar a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil opiniones y propuestas a ser tomadas en cuenta para prevenir la corrupción.

[301] El Estado analizado no se refirió a la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación.

Recomendación 4.3.2.

Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

[302] El Estado analizado no se refirió a la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación.

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación 4.4.1.

Desarrollar, tomando en cuenta su régimen jurídico interno, normas y procedimientos que creen, mantengan y fortalezcan mecanismos para estimular la participación en la gestión pública de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de adopción de políticas y decisiones públicas como parte de los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

[303] El Estado analizado en su respuesta suministra información de la cual se resalta la siguiente:

[304] Entrenamiento de sensibilización sobre temas de corrupción para funcionarios en 2012, realizado por una organización de la sociedad civil (ONG) de parte del Ministerio de Justicia y Policía.

[305] La misma ONG proporcionó información a los miembros del Parlamento en relación con su papel en la lucha contra la corrupción, y ofrece capacitaciones en temas relacionados con corrupción.

[306] A solicitud del Parlamento y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esa misma ONG está trabajando en una compilación de legislación para prevenir o luchar contra la corrupción.

[307] Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*”, pusieron de presente que no hay mecanismos formales de participación de la sociedad civil, que las iniciativas se presentan en los Ministerios y se evalúan caso por caso, que no hay claridad en los procedimientos y que no hay organismo de seguimiento de la participación.

[308] El Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a la implementación de la anterior recomendación⁷⁴, toda vez que esta se refiere al mantenimiento y fortalecimiento de mecanismos de participación de la sociedad civil.

Recomendación 4.4.2.

Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

[309] El Estado analizado no se refirió a la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación.

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación 4.5.

⁷⁴ Informe sobre la implementación en Suriname de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 13.

Establecer leyes y mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a participar en el seguimiento de la gestión pública y generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta para la prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Formular leyes y mecanismos que permitan, faciliten y ayuden a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a desarrollar actividades de seguimiento de la gestión pública y en la prevención de la corrupción.

[310] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la medida a) de la anterior recomendación.

[311] Por otra parte, durante la visita *in situ*, los representantes de la Asamblea Nacional pusieron de presente que hace falta una ley de participación de la sociedad civil en la gestión pública, pero que en estos momentos no hay planes concretos para desarrollar este tipo de normativa.

[312] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil “*Stiching Projecta*”, pusieron también de presente que hace falta una ley de participación de la sociedad civil en la administración pública, y que en general la sociedad civil no está participando en temas de gobernabilidad.

[313] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a la implementación de la medida a) de la anterior recomendación.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

[314] El Estado analizado no se refirió a la medida b) de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Regular el procedimiento para la tramitación de peticiones por escrito presentadas a las autoridades gubernamentales competentes, tal y como lo estipula el artículo 22 de la Constitución.

[315] El Estado analizado no se refirió a la medida c) de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

5.1. Asistencia recíproca

Recomendación 5.1.1

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción previstas en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de Suriname.

[316] El Estado analizado en su respuesta pone de presente al momento no ha habido nuevos desarrollos respecto de la anterior recomendación, en vista de lo cual Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación⁷⁵.

Recomendación 5.1.2.

Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de Suriname hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención.

[317] El Estado analizado en su respuesta pone de presente al momento no ha habido nuevos desarrollos respecto de la anterior recomendación, en vista de lo cual Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación⁷⁶.

5.2. Cooperación técnica mutua

Recomendación 5.2.1.

Realizar un examen general de los ámbitos específicos en que el Estado analizado podría necesitar o recibir en forma útil cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y castigar actos de corrupción y, sobre la base de ese examen, diseñar y aplicar una estrategia general que permita a la República de Suriname acudir a otros Estados Parte o no parte de la Convención y a instituciones financieras que participen en la cooperación internacional, para determinar la cooperación técnica necesaria.

[318] El Estado analizado en su respuesta pone de presente al momento no ha habido nuevos desarrollos respecto de la anterior recomendación, en vista de lo cual Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación⁷⁷.

Recomendación 5.2.2.

Promover programas de intercambio de cooperación técnica con otros Estados Parte sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción

[319] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información:⁷⁸

[320] “Suriname puede intercambiar información relativa a asistencia mutua legal en materia penal y extradición basada en disposiciones constitucionales y acuerdos bilaterales. DIRSIB [Directie Internationale Rechtshulp in Strafsaken], un escritorio especial en la Oficina de la Procuraduría, maneja y monitorea las solicitudes de asistencia legal en casos penales.

⁷⁵ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 40.

⁷⁶ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 41.

⁷⁷ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 42.

⁷⁸ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 43.

[321] *“Hay un departamento dentro del Departamento de Policía, denominado B.O.T. a cargo de Investigaciones Especiales, que se ocupa de estas solicitudes de investigación”.*

[322] El Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a la implementación de la anterior recomendación, toda vez que ésta se basó en el análisis realizado en la primera ronda referido a la elaboración de programas de cooperación técnica específicamente para casos de corrupción⁷⁹.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 6.1.

Informar a la Secretaría General de la OEA la designación de autoridades centrales, conforme a las formalidades previstas para ello.

[323] El Estado analizado no se refirió a la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación.

Recomendación 6.2.

Asegurar que las autoridades centrales cuenten con recursos suficientes que permitan hacer y recibir solicitudes de asistencia y cooperación en el marco de la Convención, así como para responderlas oportunamente, e implementar un mecanismo para canalizar tales solicitudes de la manera prevista en la Convención.

[324] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información:⁸⁰

[325] *“Como se indicara anteriormente, el DIRSIB es responsable del monitoreo de la asistencia mutua legal”.*

[326] El toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a su implementación, toda vez que la recomendación se refiere específicamente a asegurar que se dote de recursos suficientes a las autoridades centrales encargadas hacer, recibir y responder solicitudes de asistencia específicamente de casos de corrupción, y del establecimiento de un mecanismo para canalizar estas solicitudes específicamente.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1.

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

[327] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de la misma, lo siguiente:⁸¹

⁷⁹ Informe sobre la implementación en Suriname de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 16.

⁸⁰ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 43 y 45.

⁸¹ Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 45.

[328] *“Como se ha mencionado anteriormente, se llevaron a cabo capacitaciones como por ejemplo para servidores públicos, miembros del Parlamento y trabajadores de los medios de comunicación”.*

[329] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la anterior medida, así como de la necesidad de que de continúe prestando atención a la misma, teniendo en consideración de que el Estado analizado no ofrece información sobre cuándo tuvieron lugar estas capacitaciones, cuáles fueron los temas específicos, cuántos servidores públicos fueron capacitados ni qué resultados se obtuvieron.

Recomendación 7.2.

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

[330] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información:⁸²

[331] *“Hubo un plan de acción en 2010, redactado por una consultora, en la cual se hizo una lista de las recomendaciones y se estudió su factibilidad. Un número de actividades han sido ya implementadas dentro del plazo establecido”.*

[332] El Comité toma nota de la necesidad de que la República de Suriname de atención adicional a la implementación de la anterior recomendación, toda vez que se está refiriendo al “Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Convención (MESICIC)”, producto de un proyecto de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que comprendió las recomendaciones formuladas en la primera y segunda rondas de análisis,⁸³ y si bien indica en su respuesta que algunas recomendaciones han sido ya implementadas, no indica cuáles ni cuándo se llevó a cabo dicha implementación.

⁸² Respuesta de Suriname al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 47.

⁸³ Ver http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_plan_sur.pdf

ANEXO I

RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación 1.1.

Considerar la posibilidad de fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, al igual que asegurar que las leyes sobre esta materia se apliquen plenamente a todos los funcionarios públicos para hacer posible la eficaz observancia práctica del sistema de ética pública.

Medidas sugeridas:

- a) Asegurar que los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, incluidos los que ocupan cargos políticos, están sujetos a disposiciones sobre conflictos de intereses.
- b) Implementar disposiciones sobre conflictos de intereses que especifiquen las inhabilidades e incompatibilidades aplicables, antes, durante y, por un periodo razonable, después de ejercer funciones públicas.
- c) Fortalecer, complementar y actualizar las normas que rigen la conducta de la generalidad de los servidores públicos, incluyendo aquellas disposiciones orientadas a prevenir conflictos de intereses, sin perjuicio de los regímenes dirigidos a sectores particulares que por su especificidad puedan requerir un tratamiento especializado.
- d) Crear o fortalecer los mecanismos que garanticen que no se produzcan nombramientos contrarios al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes dentro de la función pública.
- e) Crear e implementar mecanismos que permitan determinar, en casos concretos, si quien desempeña funciones públicas se encuentra en una situación de conflicto de intereses y que permita adoptar medidas necesarias a fin de proteger el interés público, tales como la desvinculación del ejercicio de sus funciones, su separación del conocimiento oficial del asunto, renuncia a los intereses particulares en conflicto o la invalidez de las decisiones proferidas por quien se encuentre en tal situación.
- f) Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su competencia o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente en ejercicio de sus funciones, en este último caso durante un período razonable.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación 1.2.

Considerar la posibilidad de fortalecer y actualizar los sistemas de control y uso de los recursos dentro de la gestión pública, desarrollando normas susceptibles de aplicación coercitiva a todas las autoridades y funcionarios públicos que establezcan la obligación de preservar y usar adecuadamente los recursos que se les asignen en el desempeño de sus funciones.

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación 1.3.

Considerar adoptar mecanismos que exijan específicamente a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Teniendo presente la iniciativa legislativa existente, establecer medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
- b) Adoptar e implementar medidas de protección para los funcionarios públicos que denuncien, de buena fe, actos de corrupción, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las amenazas o represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 2.1.

Considerar la posibilidad de establecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad, cuando corresponda, a través de las normas que sean pertinentes.

Medidas sugeridas:

- a) Implementar una normativa específica, considerando la iniciativa legal existente, que incluya plazos y circunstancias razonables para exigir la presentación periódica y actualizada de la declaración de los ingresos, activos y pasivos, por parte de las personas que desempeñen funciones públicas en los cargos que establezca la ley, que incluya, además, un régimen sancionatorio para quienes no cumplan con la obligación de presentar dichas declaraciones. Estos sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan

funciones públicas constituyen un instrumento para evitar y detectar conflictos de intereses y actos o actividades ilícitas.

- b) Una vez implementados, utilizar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos como un instrumento para prevenir y detectar conflictos de intereses y actividades o actos ilícitos.
- c) Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones de los ingresos, activos y pasivos, con sujeción al sistema jurídico vigente.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11, DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 3.1.

Considerar fortalecer y, en su caso, crear los órganos de control superior en las funciones que desarrollan sobre el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 4 y 11 del artículo III de la Convención, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; y estableciendo mecanismos necesarios que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una periódica evaluación y seguimiento de las mismas.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)

4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación 4.2.1.

Establecer un sistema efectivo aplicable sobre el acceso a la información pública.

Medidas sugeridas

- a) Establecer normas escritas claras sobre el tipo de información que se puede suministrar en el marco del sistema.
- b) Establecer normas que reconozcan el derecho de todas las personas a solicitar información o a consultar u obtener copia de los documentos en poder o bajo control de las instituciones públicas, en relación con medidas oficiales, con excepción de los casos legalmente protegidos.
- c) Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y para el establecimiento de sanciones en los casos de incumplimiento de la obligación de suministrar información.

Recomendación 4.2.2.

Establecer el requisito de que todas las entidades estatales, en la medida de lo posible, divulguen públicamente sus procedimientos, resultados y demás información relevante a través del uso de métodos de comunicaciones como publicaciones, centros de divulgación, medios masivos de comunicación y sitios en Internet.

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación 4.3.1.

Establecer mecanismos formales de consulta que permitan generar a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil opiniones y propuestas a ser tomadas en cuenta para prevenir la corrupción.

Recomendación 4.3.2.

Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación 4.4.1.

Desarrollar, tomando en cuenta su régimen jurídico interno, normas y procedimientos que creen, mantengan y fortalezcan mecanismos para estimular la participación en la gestión pública de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de adopción de políticas y decisiones públicas como parte de los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

Recomendación 4.4.2.

Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación 4.5.

Establecer leyes y mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a participar en el seguimiento de la gestión pública y generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta para la prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción.

Medidas sugeridas

- a) Formular leyes y mecanismos que permitan, faciliten y ayuden a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a desarrollar actividades de seguimiento de la gestión pública y en la prevención de la corrupción.
- b) Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando

corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

- c) Regular el procedimiento para la tramitación de peticiones por escrito presentadas a las autoridades gubernamentales competentes, tal y como lo estipula el artículo 22 de la Constitución.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

5.1. Asistencia recíproca

Recomendación 5.1.1

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción previstas en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de Suriname.

Recomendación 5.1.2.

Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de Suriname hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención.

5.2. Cooperación técnica mutua

Recomendación 5.2.1.

Realizar un examen general de los ámbitos específicos en que el Estado analizado podría necesitar o recibir en forma útil cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y castigar actos de corrupción y, sobre la base de ese examen, diseñar y aplicar una estrategia general que permita a la República de Suriname acudir a otros Estados Parte o no parte de la Convención y a instituciones financieras que participen en la cooperación internacional, para determinar la cooperación técnica necesaria.

Recomendación 5.2.2.

Promover programas de intercambio de cooperación técnica con otros Estados Parte sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 6.1.

Informar a la Secretaría General de la OEA la designación de autoridades centrales, conforme a las formalidades previstas para ello.

Recomendación 6.2.

Asegurar que las autoridades centrales cuenten con recursos suficientes que permitan hacer y recibir solicitudes de asistencia y cooperación en el marco de la Convención, así como para responderlas

oportunamente, e implementar un mecanismo para canalizar tales solicitudes de la manera prevista en la Convención.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1.

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

Recomendación 7.2.

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

ANEXO II

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CUARTA RONDA DE ANÁLISIS

AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* EN SURINAME*

Lunes, 31 de marzo de 2014	
16:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Hotel</i>	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
17:30 hrs. – 18:30 hrs. <i>Hotel</i>	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica

Martes, 1 de abril de 2014	
09:00 hrs. – 10:30 hrs. <i>University Guesthouse</i>	Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.
	Tema: <ul style="list-style-type: none">• La perspectiva de la sociedad civil sobre el funcionamiento de los órganos de control para la prevención, detección, persecución y sanción de los actos de corrupción.
	<i>Cámara de Industria y Comercio de Suriname</i> Sr. Naarendorp Presidente KKF Sr. Van Sichem Miembro de la Junta Directiva

* La presente propuesta inicial de agenda ha sido elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC en cumplimiento de la disposición 13 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ* (documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2), disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf

	<p><i>Stiching Projecta</i> Sra. Charda Ganga Directora</p> <p>Sra. Rayah Bhattacharji Vice-Directora/ Coordinadora de Programa</p> <p><i>Barra de Abogados de Suriname</i> Sr. Harrish Monorath Decano de la Barra de Abogados</p> <p><i>Instituto de Contadores Certificados de Suriname (SUVA)</i> Sra. Elvira Lens Gerente Suva Bureau</p> <p>Sr. Cyriel Soeri Miembro de la Junta Directiva</p> <p><i>Universidad de Suriname</i></p> <p>Sr. Monsels Abdoelrahman Docente de la Facultad de Ciencias Sociales</p> <p>Sra. J. Aarland – Nanhoe Docente a tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Sociales</p>
10:45 hrs. – 12:30 hrs.	<p>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (continuación)</p>
	<p>Tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas durante la Primera Ronda <ul style="list-style-type: none"> - Conflictos de interés - Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos - Acceso a la información pública - Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción
	<p><i>Cámara de Industria y Comercio de Suriname</i> Sr. Naarendorp Presidente KKF</p> <p>Sr. Van Sichein Miembro de la Junta Directiva</p>

	<p><i>Stiching Projecta</i> Sra. Charda Ganga Directora</p> <p>Sra. Rayah Bhattacharji Vice-Directora/ Coordinadora de Programa</p> <p><i>Barra de Abogados de Suriname</i> Sr. Harrish Monorath Decano de la Barra de Abogados</p> <p><i>Instituto de Contadores Certificados de Suriname (SUVA)</i> Sra. Elvira Lens Gerente Suva Bureau</p> <p>Sr. Cyriel Soeri Miembro de la Junta Directiva</p> <p><i>Universidad de Suriname</i> Sr. Monsels Abdoelrahman Docente de la Facultad de Ciencias Sociales</p> <p>Sra. J. Aarland – Nanhoe Docente a tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Sociales</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs	Almuerzo
14:00 hrs – 15:00 <i>University Guesthouse</i>	Panel 1: Poder Judicial: Alta Corte de Justicia
	<p>Tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve introducción: funciones, objetivos y estructura (10 minutos) • Autonomía, independencia y régimen presupuestal del Poder Judicial • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional • Mecanismos para obtener el apoyo de la ciudadanía
	<p>Alta Corte de Justicia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr. Robert Praag Juez 2. Sra. G. De Miranda

	Juez
15:10 hrs – 16:10 hrs	Panel 2: Poder Judicial: Alta Corte de Justicia
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Previsión de cargos de sus máximas autoridades • Régimen de recursos humanos • Normatividad interna para el cumplimiento de sus funciones
	Alta Corte de Justicia <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr. Robert Praag Juez 2. Sra. G. De Miranda Juez
16:20 – 17:20 hrs	Panel 3: Poder Judicial: Alta Corte de Justicia
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno • Difusión de objetivos y funciones • Mecanismos de rendición de cuentas
	Alta Corte de Justicia <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr. Robert Praag Juez 2. Sra. G. De Miranda Juez
17:30 hrs –18:30 hrs	Panel 4: Poder Judicial: Alta Corte de Justicia
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados sobre el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica • Buena práctica
	Alta Corte de Justicia <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr. Robert Praag Juez 2. Sra. G. De Miranda

	Juez
18:30 hrs	Reunión informal^{84/} con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
Miércoles, 2 de abril de 2014	
8:30 hrs – 9:30 hrs	Panel 5: Poder Judicial: Procuraduría Pública
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Breve introducción: funciones, objetivos y estructura (10 minutos) • Autonomía, independencia y régimen presupuestal de la Procuraduría • Adopción de decisiones, régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional • Mecanismos para obtener el apoyo de la ciudadanía
	Procuraduría Pública <ol style="list-style-type: none"> 1. Sra. Garcia Paragsingh Jefa de la Procuraduría Pública
9:40 hrs – 10:40 hrs	Panel 6: Poder Judicial: Procuraduría Pública
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Previsión de cargos de sus máximas autoridades • Régimen de recursos humanos • Normatividad interna para el cumplimiento de sus funciones
	Procuraduría Pública <ol style="list-style-type: none"> 1. Sra. Garcia Paragsingh Jefa de la Procuraduría Pública
10:50 hrs – 11:50 hrs	Panel 7: Poder Judicial: Procuraduría Pública

^{84/} El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno • Difusión de objetivos y funciones • Mecanismos de rendición de cuentas
	Procuraduría Pública 1. Sra. Garcia Paragsingh Jefa de la Procuraduría Pública
11:50 hrs – 12:50 hrs	Panel 8: Poder Judicial: Procuraduría Pública
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados sobre el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica • Buena práctica
	Procuraduría Pública 1. Sra. Garcia Paragsingh Jefa de la Procuraduría Pública
13:00 hrs. – 14:30 hrs	Almuerzo
14:30 hrs – 15:30 hrs	Panel 9: Agencia Central de Auditoría (CLAD)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Breve introducción: funciones, objetivos y estructura (10 minutos) • Autonomía, independencia y régimen presupuestal de la Procuraduría • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional • Mecanismos para obtener el apoyo de la ciudadanía
	Agencia Central de Auditoría (CLAD) 1. Sr.Commissie Gerente de Auditoría 2. Sr. Meiland Contador Certificado

15:30 hrs – 16:30 hrs	Panel 10: Agencia Central de Auditoría (CLAD)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Previsión de cargos de sus máximas autoridades • Régimen de recursos humanos • Normatividad interna para el cumplimiento de sus funciones
	Agencia Central de Auditoría (CLAD) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr.Commissie Gerente de Auditoría 2. Sr. Meiland Contador Certificado
16:30 hrs – 17:30 hrs	Panel 11: Agencia Central de Auditoría (CLAD)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno • Difusión de objetivos y funciones • Mecanismos de rendición de cuentas
	Agencia Central de Auditoría (CLAD) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr.Commissie Gerente de Auditoría 2. Sr. Meiland Contador Certificado
17:30 hrs – 18:30 hrs	Panel 12: Agencia Central de Auditoría (CLAD)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados sobre el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica • Buena práctica
	Agencia Central de Auditoría (CLAD) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr.Commissie Gerente de Auditoría 2. Sr. Meiland Contador Certificado

18:30 hrs	Reunión informal^{85/} con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
Jueves 3 de abril, 2014	
08:30 hrs – 09:30 hrs	Panel 13: Ministerio de Justicia y Policía (MPJ)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Breve introducción: funciones, objetivos y estructura (10 minutos) • Régimen de competencias, mecanismos de coordinación interinstitucional y mecanismos para obtener el apoyo de la ciudadanía • Adopción de decisiones • Régimen presupuestal del MPJ
	Ministerio de Justicia y Policía (MPJ) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sra. I. Huyzen-Sedney Directora, Ministerio de Justicia y Policía 2. Sr. K. Jakaoemo Director Interino de Relaciones Internacionales 3. Sr. N. Vrede Director Interino, Asuntos Financieros 4. Asha Singh- Koendjibharie Director Interino del Departamento de Recursos Humanos
09:30 hrs – 10:30 hrs	Panel 14: Ministerio de Justicia y Policía (MPJ)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Previsión de cargos de sus máximas autoridades • Régimen de recursos humanos • Normatividad interna para el cumplimiento de sus funciones
	Ministerio de Justicia y Policía (MPJ) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sra. I. Huyzen-Sedney Directora, Ministerio de Justicia y Policía

⁸⁵. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sr. K. Jakaoemo Director Interino de Relaciones Internacionales 3. Sr. N. Vrede Director Interino, Asuntos Financieros 4. Asha Singh- Koendjiharie Director Interino del Departamento de Recursos Humanos
10:30 hrs – 11:30 hrs	Panel 15: Ministerio de Justicia y Policía (MPJ)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno • Difusión de objetivos y funciones • Mecanismos de rendición de cuentas
	Ministerio de Justicia y Policía (MPJ) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sra. I. Huyzen-Sedney Directora, Ministerio de Justicia y Policía 2. Sr. K. Jakaoemo Director Interino de Relaciones Internacionales 3. Sr. N. Vrede Director Interino, Asuntos Financieros 4. Asha Singh- Koendjiharie Director Interino del Departamento de Recursos Humanos
11:30 hrs – 12:30 hrs	Panel 16: Ministerio de Justicia y Policía (MPJ)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados sobre el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica • Buena práctica
	Ministerio de Justicia y Policía (MPJ) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sra. I. Huyzen-Sedney Directora, Ministerio de Justicia y Policía 2. Sr. K. Jakaoemo Director Interino de Relaciones Internacionales 3. Sr. N. Vrede

	Director Interino, Asuntos Financieros 4. Asha Singh- Koendjbiarie Director Interino del Departamento de Recursos Humanos
12:30 hrs. – 14:30 hrs	Almuerzo
14:30 hrs – 17:15 hrs	Panel 17: Seguimiento de la implementación de las recomendaciones de la Primera Ronda
	Temas: <ul style="list-style-type: none">• Conflictos de interés• Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos• Acceso a la información pública• Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción
	Sra. Agatha Randas Jurista Principal Asamblea Nacional
18:30 hrs	Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
19:00 hrs	Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

**AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO
PARA LA COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS
ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA**

ESTADO ANALIZADO:

SURINAME

Rolinne Gravenbeek

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC
Procuradora
Oficina del Fiscal General

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:

BRASIL

Camila Colares Bezerra

Experta Alternante ante el Comité de Expertos del MESICIC
Coordinadora General de Acuerdos y Cooperación Internacional
Contraloría General de la Unión

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional de la República y
Secretario Adjunto de Cooperación Internacional

Marcia Luciana Dantas

Procuradora del Estado
Procuraduría Pública de la Unión

Tiago Santos Faria

Analista Procesal
Servicio de Procuraduría Pública de la República

PARAGUAY

María Soledad Machuca

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC
Fiscal General Adjunta del Estado
Ministerio Público

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Laura Martínez

Oficial Jurídico Principal del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA